

HILDEBRANDT

en sus trece →

Policía podrida



► La Dirección contra la Corrupción de la Policía (DIRCOCOR) ha capturado en los últimos dos años a 462 agentes coimeros y extorsionadores. José Jerí sigue hablando de "medidas de emergencia" (26 y 27)



FOTO: CÉSAR ZAMALLOA • HT3

La mafia se afianza en Ministerio Público

(2, 3, 4 y 5)

277 fármacos prohibidos

(8 y 9)



59 millones de multa al Grupo Gloria

(10 y 11)



MATICES Mi país huele mal

(16)

Los alcaldes más sobones

(28 y 29)



Proyecto monstruo

(6 y 7)



Nadie para a la mafia

► Con el antifaz quitado y la grosería en ristre, Tomás Aladino Gálvez dinamita la Fiscalía, se protege a sí mismo y complace a la delincuencia política que lo encumbró

AMÉRICO ZAMBRANO

El domingo 14, mientras la atención pública comenzaba a desplazarse hacia las celebraciones de fin de año, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, dio un paso decisivo para consolidar su control sobre el Ministerio Público: nombró a los nuevos coordinadores de las fiscalías especializadas, las unidades encargadas de investigar los delitos más sensibles del país.

De los siete coordinadores designados por Gálvez Villegas, cuatro son fiscales superiores provisionales. No titulares. No seleccionados mediante concurso público ni sometidos a un proceso regular de selección. Su permanencia en el cargo depende de una resolución administrativa y de la confianza directa del Fiscal de la Nación.

A diferencia de un fiscal titular, un provisional no goza de estabilidad ni de garantías plenas de independencia. Su cargo es temporal, revocable y vulnerable a los cambios de poder. En términos prácticos, explica una fuente del Ministerio Público, eso introduce una relación de dependencia directa. "Es muy poco probable que un provisional le diga que no a Tomás Gálvez", señala. "Su cargo depende de él. Eso lo condiciona todo", dice.

Los nombramientos confirman ese patrón. Como coordinador nacional de Prevención del Delito fue designado el fiscal superior provisional Alfonso Barrenechea Cabrera, quien además ejerce la coordinación general del Equipo Especial abocado al caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", en el



Fiscal provisional Alfonso Peña Cabrera, nuevo coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Extinción de Dominio. En sus memorias, el exfiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, cuestionó su conducta durante una misión oficial vinculada al caso Lava Jato. Quiso adulterar una factura.



Alfonso Barrenechea, fiscal provisional cercano a "Vane". Gálvez lo ha colocado como coordinador del equipo que investiga el caso "Cuellos Blancos". Es una forma de destruirlo desde adentro.

que aparece comprometido el propio Gálvez Villegas.

Dentro del Ministerio Público, Barrenechea es considerado cercano a la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, conocida en los chats del caso como "Vane".

Cuando Benavides encabezaba el Ministerio Público, en 2022, lo nombró coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito y representante titular del Ministerio Público ante el grupo de trabajo encargado de implementar la "Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030".

"Fue su coordinador de mayor confianza", asegura un fiscal que conoció de cerca ese vínculo.

Tres años después, ya bajo la conducción interina de Gálvez, Barrenechea vuelve a ocupar una posición clave, esta vez como la cabeza del equipo que debería llevar a los "Cuellos Blancos" a juicio.

Según fuentes internas, la designación no responde a criterios de especialización sino a la necesidad de asegurar un manejo directo sobre una investigación que toca el origen mismo del poder de Gálvez Villegas dentro

del Ministerio Público.

El expediente involucra a jueces, fiscales, abogados y exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que, en 2015, votaron a favor de su nombramiento como fiscal supremo.

Colocar al frente del caso a un fiscal superior provisional -cuya permanencia depende del propio Fiscal de la Nación- le garantizaría, según las fuentes consultadas, definir el rumbo y el desenlace de una investigación que lo tiene como uno de sus ejes.

No fue un movimiento

aislado. El 5 de diciembre Gálvez Villegas apartó del caso al fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, a cargo de una investigación paralela sobre su nombramiento como fiscal supremo y la presunta intervención de los "Cuellos Blancos" en ese proceso.

Ramos Navarro no era un fiscal cualquiera. Tenía bajo su responsabilidad la elaboración del informe que debía establecer si se autorizaba o no la acción penal contra el Fiscal de la Nación y otros implicados.

Ese informe nunca llegó. El fiscal fue retirado del despacho antes de presentarlo y enviado de regreso a una fiscalía de Sullana. Con su salida, la investigación a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos quedó detenida en su punto más decisivo.

En las semanas previas también fue removida la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien avanzaba en las investigaciones contra el propio Fiscal de la Nación y su entorno más cercano, entre ellos el abogado José Luis Castillo Alva, señalado como uno de los cabecillas de la red. Poco después fue cesada la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, apenas un día después de que se le encargara preparar la acusación contra el prófugo César Hinostroza y los exconsejeros del CNM.

Tres fiscales retirados del mismo frente de investigación. Dentro del Ministerio Público la secuencia se interpreta como una intervención progresiva sobre un caso que examina la forma en que el actual Fiscal de la Nación llegó al órgano de gobierno del Ministerio Público.

En 2024 la Junta Nacional de Justicia destituyó a



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

Tomás Gálvez removió a tres fiscales que lo investigaban, colocó a coordinadores de su confianza y ahora se prepara para desactivar los equipos especiales. Ni siquiera Patricia Benavides, su hoy aliada, se atrevió a tanto.

Patricia Benavides por interferir en una investigación que involucraba a su hermana, al separar a una fiscal suprema sin la debida motivación, alterando designaciones internas. Esta vez las decisiones no recaen sobre un expediente ajeno sino sobre el que tiene como objeto al actual jefe del Ministerio Público.

El esquema se repite en otras áreas estratégicas. Como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Extinción de Dominio fue designado el fiscal superior provisional Alonso Peña Cabrera, ahora responsable de la persecución patrimonial de bienes vinculados a la corrupción y crimen organizado.

Peña Cabrera no es un fiscal desconocido. Entre 2015 y 2019 fue el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, en plena investigación del caso Lava Jato. Su actuación en ese periodo fue mencionada por el exfiscal general de Brasil Rodrigo Janot en su libro de memorias publicado en 2019, un testimonio que el fiscal José Domingo Pérez ha recordado públicamente.

"El jefe de los acuerdos con Brasil, el fiscal Alonso Peña Cabrera (...) era un tipo extraño", escribió Janot en sus memorias. "Su comportamiento llamó la atención por primera vez cuando, durante el almuerzo con miembros de la Secretaría de Cooperación Internacional, en Brasil, solicitó una factura colectiva como si fuera individual", recordó. "Es decir, enviado a Brasil por su país para investigar actos de corrupción que involucran a cuatro expresidentes, el sujeto, con el pretexto de que los viáticos que le dieron para el viaje eran bajos, no tuvo vergüenza en recurrir a una triquiñuela", reveló.

En Trata de Personas, otra fiscalía clave, la coordinación recayó en la fiscal superior provisional Rocío Gala Gálvez. Y en Lavado de Activos, eje central de investigaciones contra blanqueo de capitales y financiamiento ilícito, fue nombrado el fiscal superior provisional Germán Juárez Atoche.

La designación de este último fiscal no fue leída como un simple ascenso dentro de la institución. Juárez integró durante años el Equipo Lava Jato, desde donde participó en investigaciones emblemáticas que derivaron en sentencias en primera instancia contra dos expresidentes: Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Era, además, uno de los fiscales más experimentados del grupo. Elegible para ascender desde el 2021, había optado por postergar cualquier promoción para con-

"El doctor Juárez es una excelente persona", señaló una fuente del Equipo Especial. "Pero es cierto que ya tenía la expectativa de avanzar en su carrera. La oferta coincidió con ese momento. Él decide aceptarla y eso, en los hechos, nos debilita. Era uno de los fiscales más experimentados. El debilitamiento es innegable", aseguró.

La salida de Juárez dejó al Equipo Lava Jato con una baja sensible en un contexto ya adverso. Su coordinador, Rafael Vela, y el fiscal José

equipos especiales. Gálvez señaló que la decisión podría concretarse incluso antes de Navidad, aunque fijó como plazo máximo la primera semana de enero.

La renovación de coordinadores, de acuerdo con Gálvez, lo ha dejado "en aptitud de tomar una decisión sobre los equipos especiales". El cierre alcanzará a estructuras responsables de investigaciones emblemáticas, entre ellas el Equipo Especial Lava Jato, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efic-

investigaron al poder.

Días antes, en una entrevista con Canal N, el Fiscal de la Nación ya había adelantado que la decisión será sometida a la Junta de Fiscales Supremos, aunque advirtió que, de no contar con la aprobación, la ejecutará de manera autónoma. "Si no lo hace la junta, lo hago yo como Fiscal de la Nación. Sí tengo la potestad", afirmó.

El anuncio no fue un gesto temerario. Dentro del Ministerio Público Tomás Aladino Gálvez actúa con la convicción de que su in-

cientemente reincorporado Luis Arce Córdova no está asegurado. En paralelo, ha iniciado conversaciones para sumar a Juan Villena Campana.

La otra pieza es Pablo Sánchez. En la Fiscalía se asume que no continuará como fiscal supremo. Fuentes internas señalaron a este semanario que la Junta Nacional de Justicia no lo ratificará en el cargo.

Al cierre de esta edición, no habría alcanzado los cinco votos necesarios para obtener una resolución de ra-

FOTO JOEL DURÁN • H13



Tomás Gálvez promovió a Germán Juárez Atoche como fiscal superior provisional y coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Su salida del Equipo Especial Lava Jato significa, en los hechos, el inicio del fin del grupo de fiscales dirigido por Rafael Vela Barba.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



Según distintas fuentes del Ministerio Público, Zoraida Ávalos está dispuesta a respaldar a Gálvez y a darle su voto como Fiscal de la Nación titular en enero de 2026. Misma Boluarte.

FOTO JOEL DURÁN • H13



El voto de Pablo Sánchez ya no es un problema para Tomás Gálvez. En la Fiscalía dan por descontado que la JNJ no lo ratificará en el cargo. Quizás era lo que esperaba para no tomar decisiones.

tinuar en Lava Jato. "Nunca había postulado pese a que podía hacerlo", explicó una fuente del propio equipo. "Decidió quedarse por sus casos", afirmó.

Ese escenario cambió tras la sentencia contra Vizcarra en noviembre pasado. Según fuentes fiscales, Juárez comenzó entonces a evaluar su crecimiento profesional. La propuesta llegó poco después desde la cúpula del Ministerio Público. Personas cercanas al fiscal señalan que existía una relación de cercanía con Tomás Gálvez y que esa proximidad influyó en la decisión.

Domingo Pérez enfrentan desde hace meses una ofensiva sostenida, tanto externa como interna, que incluye investigaciones disciplinarias, ataques mediáticos y presiones políticas.

Para fiscales consultados ese movimiento marcó el inicio efectivo del desmantelamiento del Equipo Lava Jato, incluso antes de que la medida fuera ejecutada de manera formal.

En una reciente entrevista el Fiscal de la Nación interino admitió que el cambio de coordinadores fue el "primer paso" hacia la desactivación de los

cop), el Equipo Especial para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Efivip) y el Equipo Especial que investiga el caso "Cuellos Blancos".

Gálvez Villegas sostuvo que estos grupos fueron creados como órganos temporales y aseguró que "ya cumplieron su ciclo". Dentro del Ministerio Público estas declaraciones reforzaron la idea de que la destrucción es la culminación de una secuencia ya en marcha: primero, la reconfiguración del mando y el desplazamiento de fiscales claves. Luego, el cierre de los equipos que

terinato está por terminar. De acuerdo con fuentes internas, el Fiscal de la Nación interino da por hecho que Delia Espinoza no regresará a la institución y que su situación derivará en una pronta destitución. Ese escenario le abre el camino para ser elegido Fiscal de la Nación titular en enero próximo.

El cálculo incluye votos. Gálvez Villegas cuenta ya con el respaldo de Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y el suyo propio dentro de la Junta de Fiscales Supremos, según distintas fuentes fiscales. El voto del re-

tificación. Su salida estaría promovida por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.

Consultado sobre la permanencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez al frente de Lava Jato, Gálvez Villegas evitó una respuesta directa, pero dejó clara la inminencia de los cambios. "De repente no la pasan", dijo en referencia a las fiestas de fin de año. "Si llegamos a la conclusión de que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad", anunció.

Según diversas fuentes, el Equipo Lava Jato podría ser

absorbido por las fiscalías de crimen organizado, bajo la conducción de Jorge Chávez Cotrina, uno de los fiscales más cercanos a Gálvez, o por las fiscalías de corrupción de funcionarios, coordinadas por Omar Tello. Esa movida no supondría una continuidad sino una fragmentación de los casos y la pérdida del esquema de investigación que, en ocho años de trabajo, consiguió más de 65 sentencias condenatorias –entre ellas las de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra– y más de 4,500 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. La opción de trasladar las investigaciones al ámbito de Lavado de Activos, bajo la coordinación de Germán Juárez Atoche, profundizaría ese escenario. En los hechos, significaría colocar los casos más sensibles bajo la supervisión de un fiscal superior provisional, cuya permanencia depende directamente del Fiscal de la Nación.

Cualquiera de estas salidas, según fuentes del Ministerio Público, tiene un mismo derrotero: Lava Jato dejará de existir como equipo especial. Y lo mismo ocurrirá con las demás estructuras que investigaban al poder.

Estos equipos especiales se encargaron de investigar, entre otros, a altos funcionarios, partidos políticos, mandos militares implicados en asesinatos durante las protestas sociales y redes de corrupción que hoy mantienen influencia directa en el Congreso. Su pronta desaparición coincide con el avance de la coalición parlamentaria que en los últimos meses se ha abocado a la captura de las instituciones del Estado y que busca volver al poder en las elecciones de 2026.

La sola desactivación del Equipo Especial Lava Jato tendría efectos inmediatos en el tablero político. Entre los beneficiados figuran dirigentes y partidos que arrastran investigaciones abiertas o procesos en curso vinculados a lavado de dinero y organización criminal.

Uno de ellos es José Luna Gálvez, líder de Podemos

Altamirano, fiscal adjunto superior titular penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, designación adecuada en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.º 304-2022-MP-FN, de fecha 10 de marzo de 2022.

Los numerales 3 y 4 del artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo n.º 052 y modificada por el artículo único de la Ley n.º 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.

El numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley n.º 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley n.º 31718, señala que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen los requisitos para el nivel que se les designa.

El artículo 65 de la Ley n.º 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley n.º 31718, establece que el fiscal llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior es aquel que ocupe el puesto más alto en el cuadro de méritos de su nivel, como consecuencia del proceso de evaluación del desempeño parcial. En defecto de ello, el nombramiento se realiza respetando el orden de antigüedad, especialidad y experiencia en las funciones a desempeñar.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la "(...) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (...) (STC n.º 2770-2010-PATC); asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.

En ese sentido, en virtud de la facultad conferida al Fiscal de la Nación (i) para dirigir, orientar y reformular la política del Ministerio Público, con la finalidad de coadyuvar a la labor fiscal incrementando la capacidad resolutoria de los casos fiscales en trámite y alcanzar el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): "Incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad", conforme al marco normativo y a lo señalado en el informe n.º 024-2025-MP-FN-OREF-EJVP, de fecha 2 de diciembre de 2025, se hace necesario emitir el acto resolutorio a fin de nombrar y designar a los abogados Iván Vladimir Melgar Cáceres y Paulo Jesús Del Río Altamirano, para que ocupen provisionalmente los cargos de fiscales adjuntos supremos en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, para lo cual previamente se deberá dar por concluido sus designaciones señaladas en el sexto y séptimo párrafo de la parte considerativa de la presente resolución, así como los nombramientos y designaciones de los abogados que ocupan provisionalmente dichas plazas.

Consiguientemente, estando a la retención de cargo de carrera del abogado Aldo Omar Cairo Pastor, fiscal adjunto superior titular penal de Ventanilla, Distrito Fiscal de Lima Noroeste, deberá designarse en un despacho de acuerdo a su título de nombramiento, para lo cual previamente se deberá dar por concluido el



Resolución de la Fiscalía de la Nación

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Designar a la abogada Rudy Angélica Córdova Rosales, fiscal adjunta provincial titular penal (corporativa) de Sullana, Distrito Fiscal de Sullana, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Precisar que la plaza señalada en el artículo séptimo, tiene la condición de transitoria en mérito a lo dispuesto con la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos n.º 033-2006-MP-FN-JFS, de fecha 8 de junio de 2006, y Resolución de la Fiscalía de la Nación n.º 2928-2018-MP-FN, de fecha 24 de agosto de 2018.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Precisar que la plaza señalada en el artículo décimo, tiene la condición de transitoria en mérito a lo dispuesto con la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos n.º 063-2019-MP-FN-JFS, de fecha 7 de junio de 2019, y a la prórroga de su vigencia materia de la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos n.º 091-2024-MP-FN-JFS, de fecha 30 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Hacer de conocimiento a los abogados Aldo Omar Cairo Pastor, Alberth Martín Fernández Salazar, Juan Paul Ramos Navarro, Rudy Angélica Córdova Rosales, Iván Vladimir Melgar Cáceres y Paulo Jesús Del Río Altamirano que deben afectar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General n.º 007-2002-MP-FN "Normas para la Entrega de Cargo", aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación n.º 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lima Centro, Lima Noroeste y Sullana, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Coordinadora de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo "A" y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo "B", Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y a los fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas
FISCAL DE LA NACIÓN (i)

Exp. n.º 11560C20250001998
SKAL/evp

Dos de las seis páginas de la resolución del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mediante la cual removió al fiscal adjunto supremo provisional Juan Paul Ramos Navarro del despacho que investigaba su ascenso como fiscal supremo. Ramos fue enviado de regreso a Sullana justo cuando debía elaborar un informe sobre la responsabilidad penal de Gálvez y otros implicados.

Perú, investigado por el presunto financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio, en 2014, a través de la universidad Telesup. Luna es hoy una de las figuras centrales de la ac-

tual alianza parlamentaria. Otro caso emblemático es el del exalcalde de Lima y hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga. Su partido, Renovación Popular, ha solicitado al Poder Judicial el archivo y su exclusión de la investigación seguida



Fiscal adjunto supremo Juan Paul Ramos Navarro. Gálvez lo botó porque lo investigaba y estaba en proceso de formular acusación. Todo un gánster.

por presunto favorecimiento al lavado de activos en el caso "Línea Amarilla", vinculado a aportes de OAS y Odebrecht cuando la agrupación aún se denominaba Solidaridad Nacional.

También figura Lourdes Flores Nano, histórica dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC), por el presunto delito de lavado de activos, debido a aportes ilícitos de Odebrecht y Camargo y Correa a sus campañas presidenciales (2006 y 2010) y municipal (2010). El caso permanece bajo el paraguas de las investigaciones derivadas del Lava Jato peruano. El dato no es menor: el PPC integra hoy la alianza Unidad Nacional, registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones junto a Unidad y Paz, y a Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, el partido fundado por Tomás Gálvez antes de su retorno a la Fiscalía.

El Partido Aprista es otro de los actores alcanzados por las pesquisas. Sus principales dirigentes continúan siendo investigados por presuntos vínculos con el esquema de sobornos y aportes ilegales de Odebrecht en carpetas que aún no han sido cerradas de manera definitiva.

Dos fiscales que observan este escenario con asombro señalaron a este semanario que destruir las investigaciones que alcanzan al poder político constituye, más que un acto de impunidad, una forma de delinquir.

La diferencia ahora es que esa operación ya no se ejecuta en silencio: ha sido anunciada y defendida públicamente por el propio Fiscal de la Nación. Con Tomás Aladino Gálvez a la cabeza, la Fiscalía ha dejado de perseguir mafias y ha empezado a comportarse como una de ellas. ■

El proyecto monstruo

► En la cima del Congreso del hampa, Fernando Rospigliosi pretende ahora que se pueda matar a manifestantes con absoluta impunidad. Es el fujimorismo con esteroides

SHANNA TACO

“Este proyecto de ley es un salvoconducto para matar manifestantes”, dice Julissa Mantilla Falcón, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proyecto legislativo que alista Fernando Rospigliosi, el mandamás fujimorista del Congreso. La iniciativa propone eximir de cualquier responsabilidad penal a policías y militares que hieran o maten civiles durante protestas sociales. Ocho especialistas consultados coinciden en que el proyecto de Rospigliosi supone abrirles la puerta a las ejecuciones extrajudiciales.

El 18 de octubre de 2025 el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 20 del Código Penal. La iniciativa plantea que policías y militares queden exentos de responsabilidad penal si causan lesiones o muertes al proteger “activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados”.

“Todos los tratados de derechos humanos se basan en el respeto al derecho a la vida. Este proyecto elimina el proceso judicial, suprime el acceso a la justicia y suprime la reparación civil violando las disposiciones constitucionales y la convención americana de derechos humanos. No conozco ningún otro país que tenga

una impunidad penal de esta naturaleza, ni en las dictaduras más exageradas”, comenta Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores.

“Se trata de una carta blanca para matar. O sea si un manifestante está afuera del Poder Judicial y la policía considera que cruzó una barrera, lo matan”, dice la abogada Julissa Mantilla. A su juicio, la norma busca institucionalizar la violencia estatal y desalentar cualquier forma de protesta.

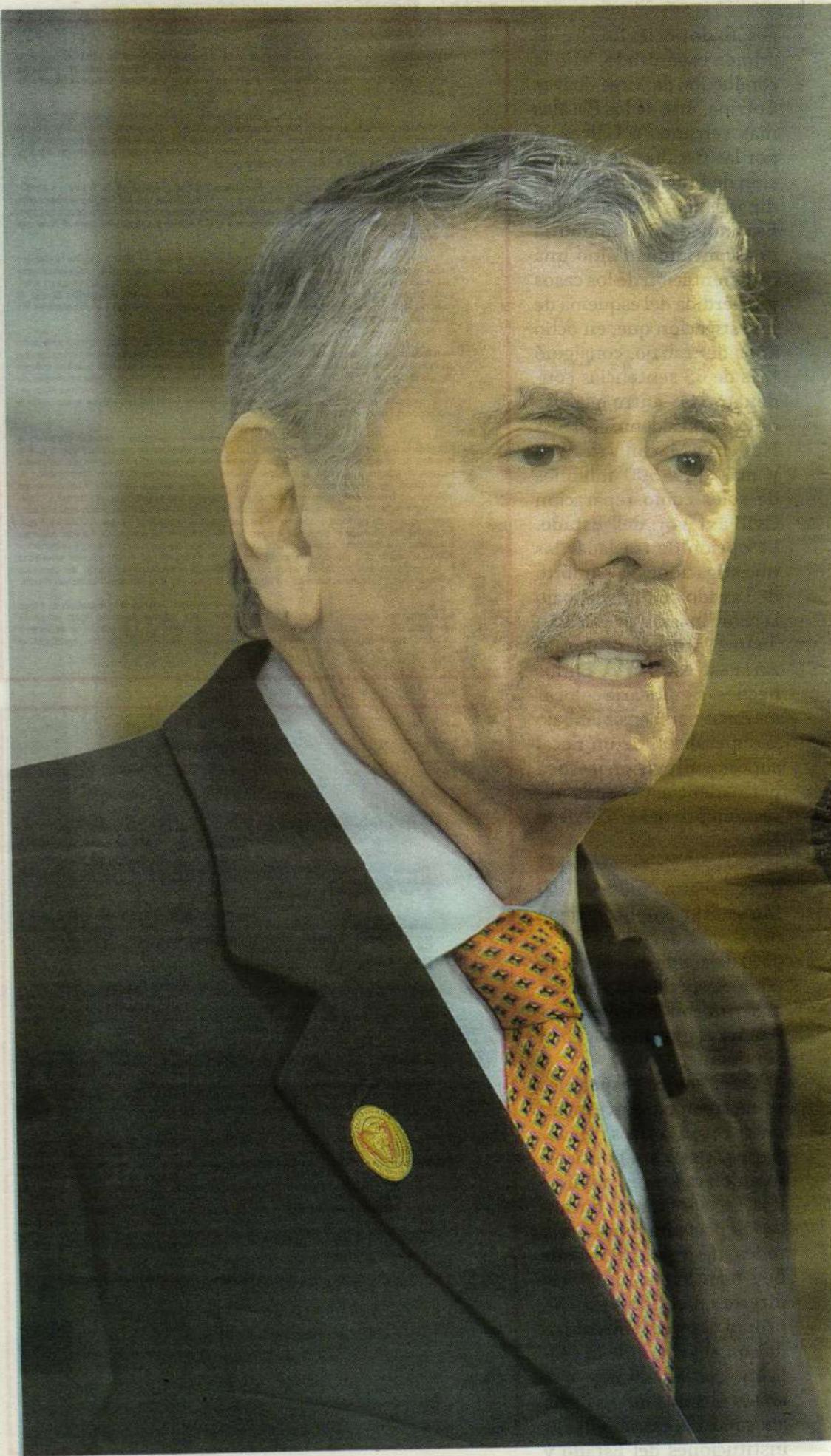
Organismos internacionales de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch (HRW) expresaron su rechazo al proyecto.

Desde Human Rights Watch, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, advierte que la norma “manda una señal de impunidad y de que las fuerzas militares y la policía pueden salir a asesinar”. En la misma línea, Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH, señala que legalizar la muerte de manifestantes en espacios públicos “no tiene cabida en un Estado de derecho”.

Según los especialistas, el proyecto de Rospigliosi responde a un intento de control violento de las protestas. La legislación vigente ya exonera de responsabilidad penal a policías y militares siempre y cuando actúen dentro del marco constitucional.

“Es un proyecto de ley paupérrimo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y no

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, autor del proyecto que les permitiría a policías y militares realizar ejecuciones extrajudiciales.



es que no la puedan utilizar, pero hay estándares nacionales e internacionales que prohíben saltarse protocolos y optar directamente por una ejecución. La vida no puede ser un costo colateral para proteger activos críticos”, explica Rosario Grados, directora de Programas de Amnistía Internacional Perú.

“No se puede sacrificar la vida para proteger un bien ma-

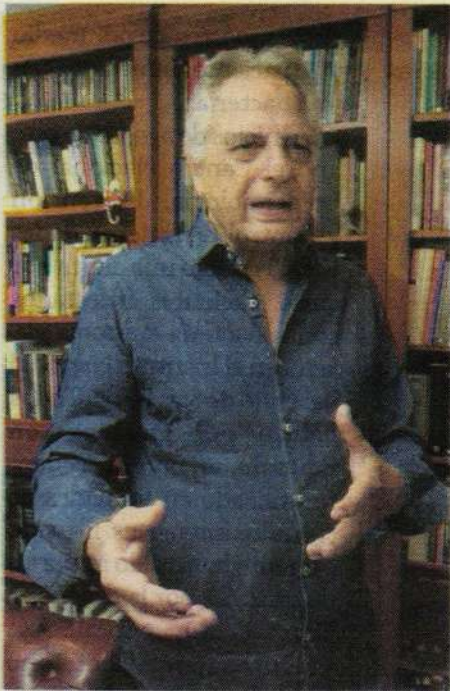
terial. Eso no tiene sustento en ninguna teoría básica de derechos humanos”, afirma Valeria Reyes Menéndez, especialista en derechos humanos del IDEH-PUCP.

Desde Amnistía Internacional detallan que la norma no protege a quienes actúan conforme a la ley sino a quienes hacen un “uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.

“El manifestante no es un

enemigo –añade la politóloga Rosario Grados–, una manifestación no puede ser equiparada a una guerra. La propuesta del congresista va en esa línea y genera mucha más desconfianza de la población con la policía”.

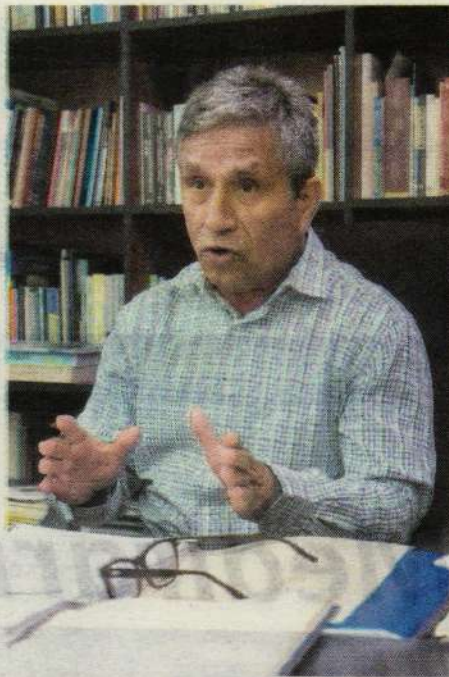
Para el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros el proyecto resulta especialmente grave porque pretende “establecer un esquema represivo” en



Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores: "No conozco ningún otro país que tenga una impunidad penal de esta naturaleza, ni en las dictaduras más exageradas".



Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch: "Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que saber que (...) es un intento por congraciarse con ellos, pero en la práctica lo que hacen es ponerlos en un inmenso riesgo frente a acciones internacionales en su contra".



Carlos Rivera Paz, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL): "Lo que está haciendo (Fernando Rospigliosi) es plasmar legislativamente la propuesta política de Fuerza Popular respecto a los derechos humanos y los derechos de las víctimas".



Rosario Grados, directora de Programas de Amnistía Internacional Perú: "Hay estándares nacionales e internacionales que prohíben saltarse protocolos y optar directamente por una ejecución".



Valeria Reyes Menéndez, especialista en derechos humanos del IDEH-PUCP: "No se puede sacrificar la vida para proteger un bien material. Eso no tiene sustento en ninguna teoría básica de derechos humanos".



Julissa Mantilla Falcón, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Este proyecto de ley es un salvoconducto para matar manifestantes".

un contexto marcado por un proceso electoral en ciernes y un escenario de descontento social.

La propuesta de Rospigliosi no solo evita que policías y militares sean juzgados. También impide que las víctimas o sus familias reciban una reparación civil.

Desde Human Rights Watch explican que incluso en países carentes de democracia como Cuba, Venezuela y Nicaragua no existe ley parecida a la que plantea Rospigliosi.

"En El Salvador hay un estado de excepción donde ha habido casos de tortura, pero ni ahí existe una ley de esa naturaleza", comenta la especialista Juanita Goebertus.

Otro objetivo del proyecto de Rospigliosi es cerrar las investigaciones a policías y militares procesados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Para los especialistas consultados se trata de "una amnistía encubierta".

Aquellas protestas dejaron un saldo de 49 fallecidos y más de 900 heridos. Organismos internacionales documentaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuyó responsabilidad al Estado por las muertes registradas.

El pasado 11 de diciembre Fernando Rospigliosi organizó una ceremonia de reconocimiento a excoman-

dantes de las Fuerzas Armadas y la PNP para condecorar a los oficiales "por la defensa del orden constitucional el 7 de diciembre de 2022". Durante la ceremonia volvió a comprometerse a sacar adelante su proyecto de ley para combatir a las "hordas violentas", en referencia a los manifestantes.

"Hay una continuidad preocupante en los proyectos de Rospigliosi. Él impulsó la amnistía general para todo lo que ocurrió en los 80, luego la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, ahora esta ley. Este proyecto suma otra pieza al rompecabezas de impunidad que el congresista está elaborando hace rato", comenta la abogada Julissa Mantilla.

"Más allá de Rospigliosi como personaje, está Fuerza Popular. Rospigliosi es una de las caras más visibles de ese partido y lo que está haciendo es plasmar legislativamente la propuesta política de Fuerza Popular respecto a los derechos humanos y los derechos de las víctimas", dice Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

"Si realmente se busca respaldar a policías y militares, deberían darles equipamiento y entrenamiento, esas dos cosas son las principales falencias", comenta el exviceministro Nicolás Zevallos.

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros explica que organismos internacionales ya no consideran al Perú un

Estado plenamente democrático sino un régimen híbrido, marcado por el deterioro del Estado de derecho, de la separación de poderes y una afectación creciente de la legalidad.

Human Rights Watch documentó este deterioro en su informe *Legislar para la impunidad*, que analiza cómo el Congreso ha aprobado normas que facilitan el avance del crimen organizado. Según su representante, Juanita Goebertus, el Perú ofrece condiciones prácticamente únicas en la región para el avance del crimen con "un Congreso disfuncional y un Ejecutivo dispuesto a respaldar la ilegalidad".

Desde la FIDH, Jimena Reyes alerta sobre un tránsito hacia el autoritarismo, marcado por la captura de las instituciones y la aprobación de leyes que favorecen la impunidad frente a "graves violaciones de derechos humanos".

Para los organismos internacionales el Congreso peruano se ha convertido en una pieza clave en el debilitamiento de la lucha contra el crimen organizado.

"Es impactante la cantidad de leyes que ha aprobado el Congreso peruano para debilitar la lucha contra el crimen organizado, que mandan la señal de que este Congreso está interesado en promover la impunidad. Este nuevo proyecto avanza en ese mismo sentido. Nosotros analizamos 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y lo que encontramos es que han actuado a favor del crimen organizado, en un Parlamento con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción y otros delitos", añade Goebertus.

Para los especialistas, tanto la Defensoría del Pueblo como el Tribunal Constitucional han eludido una respuesta firme frente a las normas que amplían la impunidad, guardando silencio o respaldando iniciativas como las amnistías impulsadas desde el Congreso.

Juanita Goebertus advierte: "Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que saber que esta es una norma totalmente contraria a estándares internacionales y si hay algo que sabe el Perú es que la justicia internacional puede demorar en llegar, pero llega". ■

cinco muertos de por medio y 28 pacientes infectados con una bacteria.

A inicios de agosto de este año el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) recibió una alerta por cinco pacientes infectados con la bacteria *Ralstonia pickettii* en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Todos habían sido tratados con Editoxin, un potente sedante utilizado en unidades de cuidados intensivos. El medicamento había sido importado en 2021 por la droguería Nordic Pharmaceutical S.A.C. y fabricado por el laboratorio Farbe Firma, en la India.

Tras recibir la alerta, el Ministerio de Salud identificó otros 23 pacientes infectados con la misma bacteria en tres hospitales, una clínica y un centro de diálisis.

Entonces Digemid ordenó la inmovilización del medicamento a nivel nacional. Posteriormente, el 22 de octubre, el Centro Nacional de Control del Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que el fármaco había llegado contaminado de la India.

Para que un medicamento pueda comercializarse en boticas, farmacias y establecimientos de salud en el Perú se requiere el registro sanitario de Digemid. Uno de los requisitos indispensables para obtenerlo es que el lugar donde se fabrica el producto cuente con un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

"Las buenas prácticas de manufactura son un estándar de la Organización Mundial de la Salud que todos los países han adoptado y que se exige a todos los laboratorios que fabrican medicamentos. Cada país, a través de su autoridad reguladora, otorga ese certificado", explica Javier Llamaza, investigador y químico farmacéutico.

El especialista recuerda que durante la pandemia, debido a la crisis sanitaria que se desató, los requisitos para la importación de medicamentos se relajaron para acelerar el ingreso de los fármacos. Una de las medidas fue dar por bueno el certificado de Buenas Prácticas del país de origen sin que Digemid verificara si el proceso de fabricación era

Bagó

InRetail Pharma

GRÜNENTHAL

gsk
GlaxoSmithKline

Medifarma

JPS

Droguería CADILLO S.A.C.

Genomma Lab. Internacional

Entre finales de octubre y mediados de diciembre, Digemid suspendió la venta de 277 medicamentos importados por 58 droguerías peruanas. Las visitas a las plantas que los elaboraban empezaron el año 2023.

ALONSO ZAMBRANO

Otra vez las farmacéuticas. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) les ha prohibido la venta de 277 medicamentos fabricados sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Los laboratorios sancionados adquirirían los productos en fábricas extranjeras que trabajan en condiciones de insalubridad y los vendían en el mercado local. Entre las sancionadas están varias de las farmacéuticas más importantes del país como Inretail Pharma (Grupo Intercorp), Laboratorios Bagó y Droguería JPS y la reincidente Medifarma, la del suero asesino.

Los expedientes revisados para este reportaje revelan que desde el año 2023 funcionarios de Digemid viajaron a la India, Argentina y Uruguay para inspeccionar las plantas donde se fabricaban estos medicamentos y constataron que no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad y logísticas. Pese a los hallazgos, el ente fiscalizador no suspendió la venta de los fármacos. "Durante años se permitió que productos de calidad cuestionable siguieran en el mercado", señala una fuente de Digemid, que sólo reaccionó cuando hubo

Irremediable

► Con sospechosa tardanza la DIGEMID prohíbe la venta de 277 medicamentos fabricados negligentemente en el extranjero e importados por farmacéuticas peruanas



"Estamos hablando de medicamentos que siguieron consumiéndose pese a que ya se había verificado que los laboratorios no cumplían con las buenas prácticas de manufactura", advierte el químico farmacéutico Javier Llamaza.



"Cuando hay una denegación del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el producto no debería seguir en el mercado", dice Maritza Reátegui, especialista en derecho farmacéutico.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

realmente óptimo. Cabe precisar que son los laboratorios importadores los que deben coordinar y financiar el viaje de los inspectores de Digemid a las fábricas en el extranjero.

"Se aceptaron como válidos los certificados del país de origen y luego Digemid debía verificar esas 'buenas condiciones'. Así, a varias droguerías se les otorgaron registros sanitarios por hasta cinco años", explica Llamaza.

Nordic Pharmaceutical, la empresa que importó Editoxin,

graves. Sin embargo, esta revista comprobó que la mayoría de los problemas ya habían sido detectados el 2023, pero las sanciones quedaron congeladas dos años.

Las funcionarias responsables del área de Productos Farmacéuticos de Digemid eran Indhira Bernuy Zagaceta (2023-2024) y Sonia Gutiérrez Aures, quien continúa en el puesto.

Medifarma, el laboratorio que fabricó el suero fisiológico que mató a siete pacien-

te Maritza Reátegui, especialista en derecho farmacéutico y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En 2022 Medifarma importó 20 medicamentos fabricados por el Laboratorio Fármaco Uruguayo, que opera en Montevideo. La mayor parte están destinados al tratamiento del cáncer.

Entre el 20 y el 28 de noviembre de 2023, inspectores de Digemid acudieron a estas instalaciones en la capital uruguaya y detectaron múltiples

de 2023, un informe técnico que negó el certificado de BPM al Laboratorio Fármaco Uruguayo. ¿Qué ocurrió después? Como Digemid no publicó la resolución de suspensión del registro sanitario, la empresa continuó comercializando sus productos durante dos años.

"Cuando hay una denegatoria del certificado de BPM, el producto no debería seguir en el mercado. La suspensión del registro sanitario debería ser inmediata", dice Maritza

por las demoras en Digemid fue Inretail Pharma, empresa del Grupo Intercorp. Entre el 4 y el 11 de septiembre de 2023, inspectores de Digemid acudieron al laboratorio Temis Lostaló S.A., en Argentina, donde se fabrica el medicamento Colpoestriol Óvulo de 500 mg.

Durante la inspección se detectó que en las áreas de dispensación, fabricación y envasado no existían alarmas para detectar pérdidas de presión de aire, que los operadores no realizaban reportes periódicos del estado de los equipos, que había fallas graves en el sistema de agua y que no se realizaban análisis esenciales para detectar presencia microbiana en las sustancias empleadas en las mezclas.

"Se constató que no se han realizado ensayos microbiológicos del principio activo Mesalazina en polvo, incumpliendo el artículo 22.17 (crítico) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura", se consignó en el informe. La Mesalazina es un medicamento usado para tratar las úlceras intestinales.

El 12 de octubre de 2023 Digemid denegó el certificado de BPM a Inretail Pharma. Pero los medicamentos siguieron vendiéndose porque el expediente quedó paralizado hasta 2025, cuando recién se emitió la suspensión del registro sanitario.

Otra empresa comprendida es Laboratorio Bagó del Perú S.A., que importa el medicamento Docetaxel, utilizado por vía intravenosa en el tratamiento del cáncer. El producto es fabricado por Laboratorios IMA, en Argentina.

Los inspectores de Digemid viajaron a esa planta entre el 2 y el 9 de diciembre de 2024. Detectaron manejo inadecuado de reactivos peligrosos, suciedad y polvo en las esclusas del personal, ausencia de esclusas de aire en zonas críticas y falta de sistemas de extracción de aire, entre otras deficiencias.

Digemid denegó el certificado de BPM a Laboratorios Bagó el 26 de diciembre de

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

PERÚ Ministerio de Salud Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

R.D. N° 17002 -2025/DIGEMID/DPF/EMNDYO/MINSA

RESOLUCION DIRECTORAL

producto Paclitaxel cuyo tamaño de Lote es de 16400 unidades, asimismo, durante la revisión de la "Gestión de cambio B20220502" de mayo del 2022, el mismo que describe las acciones y consideraciones para el aumento de tamaño de Lote de Paclitaxel a 16400 unidades, se evidenció que no se evaluó en impacto de dicho cambio en el estado de calificación y validación, como por ejemplo si la capacidad de la Autoclave y las cargas validadas cubrían dicho cambio, asimismo el impacto en la validación del proceso de manufactura, validación de filtración esterilizante, entre otros estatus. (No conformidad N° 3 del 22/11/2023), incumpliendo los numerales 29.123 (mayor), 15.6 (crítico), 15.7 (mayor), 1.1 e) (mayor), 6.65 (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos (Decreto Supremo N° 021-2018-SA) y de la Guía de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica.

4) Cuentan con una balanza código EM124 para la pesada de estándares y muestras, la misma que en base al informe de calibración N° 289-110916 emitido por el proveedor de servicio LPGA Laboratorio de Calibración, establece en el reporte de fecha 07/08/203 una cantidad mínima de 0.018 g que equivale a 18 mg, sin embargo, los procedimientos. BPQU6021A "Procedimiento analítico de Leucovorina Fármaco Uruguayo" establece pesar 10 mg de ácido 7.8 — dihidrofolílico. BPQU8015 "Procedimiento analítico de Leucovorina cálcica materia prima" establece pesar 17.5 mg de ácido fólico. PQU8025 "Procedimiento analítico de Docetaxel anhidro materia prima" establece pesar para la preparación de la solución de referencia 5mg de Docetaxel y 5mg de Docetaxel impureza C. No conformidad N° 1 del 23/11/2023), incumpliendo el numeral 22.38 (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos (Decreto Supremo N° 021-2018-SA) y de la Guía de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica.

5) Durante la revisión de los reportes analíticos correspondientes a los principios activos:

a) Paclitaxel FUB220509001 no se evidencia el desarrollo del análisis de disolventes residuales (n-hexano, Acetona, Tetrahidrofurano, Etilacetato, Metanol, Diclorometano, Tolueno y Piridina).

b) Docetaxel FUB220928001 y Docetaxel FUB230419006 no se evidencia el desarrollo del análisis de disolventes residuales (éter de petróleo, isopropil éter, acetona, metanol, diclorometano y triclorometano Benceno).

c) Leucovorina FUB210909002 y Leucovorina FAU220923005 no se evidencia el desarrollo del análisis de disolventes residuales (etanol), los mismos que son tomados de Certificado del Proveedor, asimismo, el laboratorio de control de calidad de la Planta B no cuenta con un cromatógrafo de gases. No conformidad N° 2 del 23/11/2023), incumpliendo el incumpliendo los numerales. 1.1 e) (mayor), 22.4 (mayor), 22.14 (crítico), 22.7 (crítico), 22.38 (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de productos Farmacéuticos (Decreto Supremo N° 021-2018-SA) y de la Guía de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica.

6) Durante la revisión de los reportes analíticos correspondientes a los excipientes Manitol FUA21J004001, no se evidencia el desarrollo del análisis de Níquel y el Punto de fusión; y Tween 80 FUA220629001, no se evidencia el desarrollo del análisis de Viscosidad, Composición de ácidos grasos (ácido mirístico, ácido palmítico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico), Óxido de etileno y Dioxano, los mismos que son tomados de Certificado del Proveedor, asimismo, el laboratorio de control de calidad de la Planta B no cuenta con un cromatógrafo de gases y viscosímetro. No conformidad N° 3 del 23/11/2023),

www.digemid.minsa.gob.pe Av. Parque de las Leyendas N° 240, Urb. Pando - San Miguel, Lima 32, Perú

Resolución reciente que suspende el registro sanitario de Irinotecan, medicamento usado para el tratamiento del cáncer, importado por Medifarma.

xin fabricado por el laboratorio Farbe, fue una de las compañías que obtuvo su registro sanitario sin contar con un certificado de BPM validado por Digemid.

Entre el 29 de octubre y el 10 de diciembre de este año, tras el escándalo por la contaminación de Editoxin, Digemid publicó 277 resoluciones que suspendieron el registro sanitario de medicamentos fabricados con deficiencias

tes, también está en la lista. Digemid le ha prohibido la importación y venta de 20 medicamentos. Entre ellos están Irinotecan, Etoposido, Gemcitabina y Docetaxel, fármacos de suministro intravenoso en tratamientos de quimioterapia.

"Cuando hablamos de inyecciones, no puede existir ninguna carga microbiana porque el medicamento va directamente a la vena", advier-

irregularidades: uso de jarras de plástico no validadas para manipular soluciones, procesos de limpieza inadecuados, elaboración de soluciones en volúmenes mayores a los autorizados, uso de balanzas inapropiadas, ausencia de un cromatógrafo de gases para detectar impurezas tóxicas, entre otros.

Con estos hallazgos, los inspectores de Digemid emitieron, a finales de diciembre

Reátegui, especialista en derecho farmacéutico.

"Estamos hablando de medicamentos que siguieron consumiéndose pese a que ya se había verificado que los laboratorios no cumplían con las buenas prácticas de manufactura. Incluso las propias empresas debieron retirarlos del mercado", añade el químico farmacéutico Javier Llamaza.

Otro de los beneficiados

Suspensión del registro sanitario del Colpoestriol, medicamento importado por Inretail Pharma, del Grupo Intercorp. En el documento se reseñan varias irregularidades halladas en la fábrica donde se elaboraba el fármaco.

PERÚ Ministerio de Salud Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

R.D. N° 17023 -2025/DIGEMID/DPF/EMNDYO/MINSA

RESOLUCION DIRECTORAL

Los días 04, 06, 06, 07, 08 y 11 de septiembre del año 2023, se realizó la Inspección de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura al laboratorio LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., ubicado en Calle Zepita N° 3178, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires - Argentina, con, según: Plan de Inspección de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura entregado al laboratorio. Los inspectores fueron atendidos por los responsables técnicos, con quienes se realizó la inspección a las instalaciones de fabricación, control de calidad, almacenes, sistemas de apoyo crítico, así como la verificación de la documentación relacionada y entrevistas al personal involucrado en base a los ítems indicados;

Que, en ese sentido, el personal de DIGEMID se apersono a la dirección declara y autorizada para el funcionamiento de la oficina administrativa y planta de la Laboratorio LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. ubicado en Calle Zepita N° 3178, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina, según el Plan de Inspección de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura entregado al laboratorio. Los inspectores fueron atendidos por los responsables técnicos, con quienes se realizó la inspección a las instalaciones de fabricación, control de calidad, almacenes, sistemas de apoyo crítico, así como la verificación de la documentación relacionada y entrevistas al personal involucrado, durante el desarrollo de la inspección se detectaron no conformidades las mismas que fueron comunicadas y entregadas por escrito al personal responsable del laboratorio. Asimismo, los responsables técnicos del laboratorio presentaron los análisis de causa, acciones correctivas y preventivas, que fueron evaluados por los inspectores y cuyos resultados fueron consignados en el cuadro "Resultado del Análisis de las Acciones Correctivas Presentadas", el cual forma parte del Acta de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica N° 104-1-2023, quedando pendientes de subsanar las que se detallan a continuación:

1. No Conformidad N° 1 del día 04/09/2023: "En las áreas de Dispensación, fabricación y envasado, se evidenció que no cuentan con sistemas de alarma para advertir de cualquier pérdida de la condición de presión requerida." Incumpliendo el artículo 28.7 g) (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-SA y Guía de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica, aprobada por Resolución Ministerial N° 779-2019/MINSA.

2. No Conformidad N° 1 del día 06/09/2023: "Cuentan con los Reportes anuales de los Productos Kobian 75mg comprimidos (período 01/12/2018 al 01/02/2021), 100 mg comprimidos (período 01/04/2017 al 31/03/2019) y 150mg comprimidos (período 01/03/2018 al 01/03/2021) y del Producto Colpoestriol Óvulos (período 01/01/2022 al 31/12/2022), sin embargo se constató que no se ha incluido lo siguiente en dichos reportes: Calificación de proveedores, Calificación de equipos, Calificación del Sistema de Apoyo y Mantenimiento del estado validado." Incumpliendo los artículos 17.1 (mayor) y 17.4 (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-SA y Guía de Inspección para Establecimientos de Producción Farmacéutica, aprobada por Resolución Ministerial N° 779-2019/MINSA.

3. No Conformidad N° 2 del día 06/09/2023: "No cuenta con Reporte anual del Producto: Kobian 100 mg comprimido para el periodo 2022." Incumpliendo los artículos 17.1 (mayor), 17.2 (mayor) y 17.3 (mayor) del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-SA y Guía de Inspección para Establecimientos de

www.digemid.minsa.gob.pe Av. Parque de las Leyendas N° 240, Urb. Pando - San Miguel, Lima 32, Perú

Destruyendo con cemento

► Se confirma en segunda instancia el fallo de INDECOPi contra Yura, la empresa cementera del Grupo Gloria. Sus abominables prácticas están documentadas



BRUNO AMORETTI

La prosperidad de la cementera Yura se consolidó a punta de reglajes, amenazas y boicots a las empresas

rivales. Fue una estrategia sistemática para capturar el mercado del sur del país. Así se desprende de la sentencia del Indecopi que sanciona a la compañía de la familia Rodríguez Banda con una multa

de 59'500,000 soles. Para confirmar el objetivo de eliminar a la competencia fueron una prueba decisiva los correos internos de la empresa, donde se hablaba explícitamente del "plan de demolición" y de

Los promotores de Yura recorrían ciudades y distritos para detectar qué comerciantes vendían cementos distintos al suyo. En el mejor de los casos obligaban a firmar acuerdos de exclusividad.



Humberto Vergara Quintero, gerente general de Yura entre el 2014 y el 2018. Todas las decisiones de los seguimientos y amenazas pasaban por su escritorio.



Kevin Delgado Paredes, jefe comercial y de marketing de Yura. Fue uno de los directivos con más participación en la decena de correos delatores. Recibió una sanción del Indecopi de S/936,000.



Julio Cáceres Arce, gerente de gestión comercial de Yura entre el 2014 y el 2019. "Hemos tenido acciones paliativas y resultados efectistas, pero no efectivos. La Alta Dirección ha dispuesto que lo referido a competencia se cierra sí o sí", escribió en un correo interno de la empresa.

la "táctica de guerrilla" para deshacerse de los rivales.

Eduardo Quispe Pandia es dueño de Direpsur, la empresa que comercializa la marca de cementos Wari. Durante 18 años fue distribuidor de Yura hasta que en el 2016 decidió

montar su propio negocio. Eligió como centro de operaciones a la ciudad de Arequipa y empezó a importar cemento y a venderlo en seis regiones del sur del país. Pagó caro convertirse en competencia del clan Rodríguez Banda.

"Me arrepentí de haber sido emprendedor. Me hicieron quebrar. A mis clientes les decían que me iban a desaparecer en tres meses. Me empezaron a seguir a todas partes, desaparecían mi producto de las ferreterías y hasta me vigilaban con un dron en mi planta", afirma Quispe.

El empresario denunció a Yura el 2018 ante el Indecopi, pero el ente regulador desestimó su reclamo y le exigió más pruebas. "Era una situación tan delincuencial que un día —añade Quispe— dejaron en mi oficina un sobre con correos electrónicos de sus directivos donde daban detalles de mis ventas y mi cartera de clientes. El mensaje era: 'sabemos todo de ti'. Se lo mostré al Indecopi y por fin decidieron hacer una inspección y revisar las computadoras de Yura".

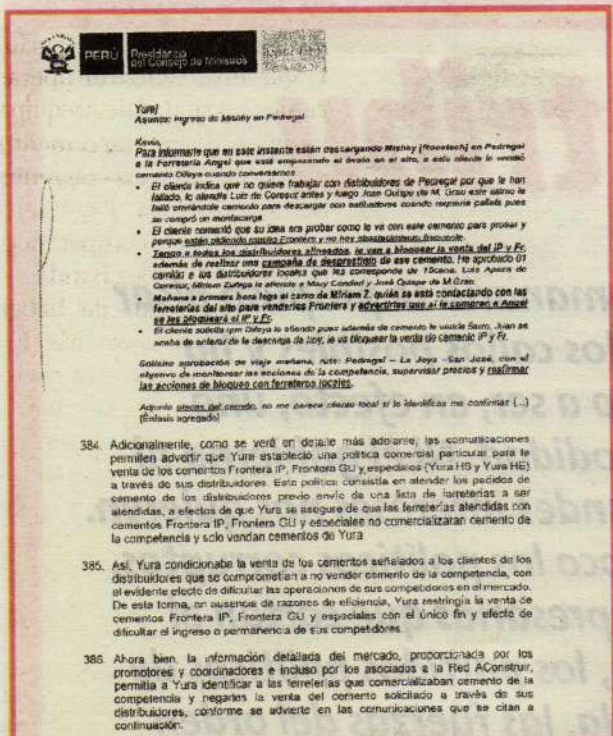
Lo que allí encontraron fue demoledor. Un total de 215 correos electrónicos de los gerentes que confirmaban la denuncia de Quispe.

De la correspondencia se desprende que entre el 2014 y 2019 la cementera articuló una maquinaria de complot y desprestigio contra sus competidores.

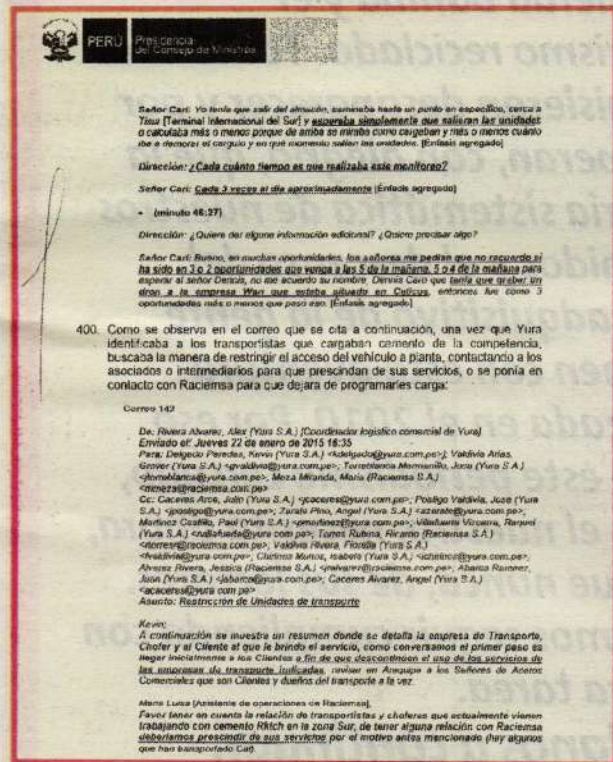
En la trama participaron cuatro gerentes y cinco coordinadores zonales de Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno, Madre de Dios y Tacna. También tuvieron un papel decisivo 94 promotores de Yura, quienes en teoría visitaban ferreterías pero que en la práctica ejecutaban el trabajo de vigilancia, presión y hostigamiento a la competencia.

Indecopi también encontró responsabilidad en la alta dirección de la empresa. Existen correos que demuestran que el fallecido Vito Rodríguez, antiguo mandamás del Grupo Gloria, conocía el esquema y permitió la estrategia anti-competitiva.

Durante el periodo investigado, Yura mantuvo un control casi absoluto del mercado del sur del país: entre el 96% y el 99%. Contaba con 13 centros operativos y con el respaldo logístico de Raciemsa,



Correo enviado por Paul Martínez Castillo, coordinador zonal de Arequipa de Yura en agosto del 2015: "Tengo a todos los distribuidores alineados, le van a bloquear la venta (...) además de realizar una campaña de desprestigio a ese cemento (Mishky)".



Testimonio de Alexander Cari, promotor de Arequipa de la empresa Yura. Contó que vigilaba las plantas de las empresas competidoras hasta tres veces al día. "Me pedían que venga a las 5 o 4 de la mañana para grabar con un dron a la empresa Wari", dijo.

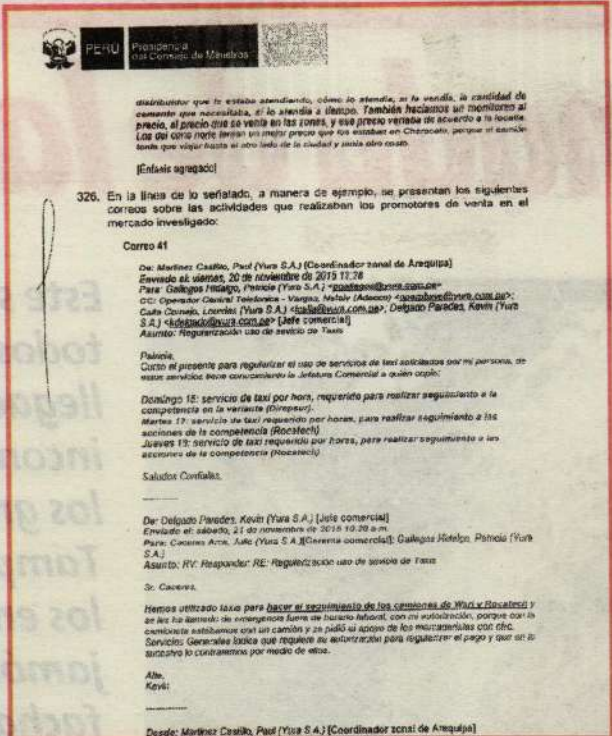
la empresa de transporte del Grupo Gloria. En términos prácticos era la dueña del mercado y aun así buscó eliminar cualquier rival por minúsculo que fuera.

Las principales afectadas fueron las cementeras peruanas Wari, de la compañía Direpsur, y Mishky, del grupo Rocatech.

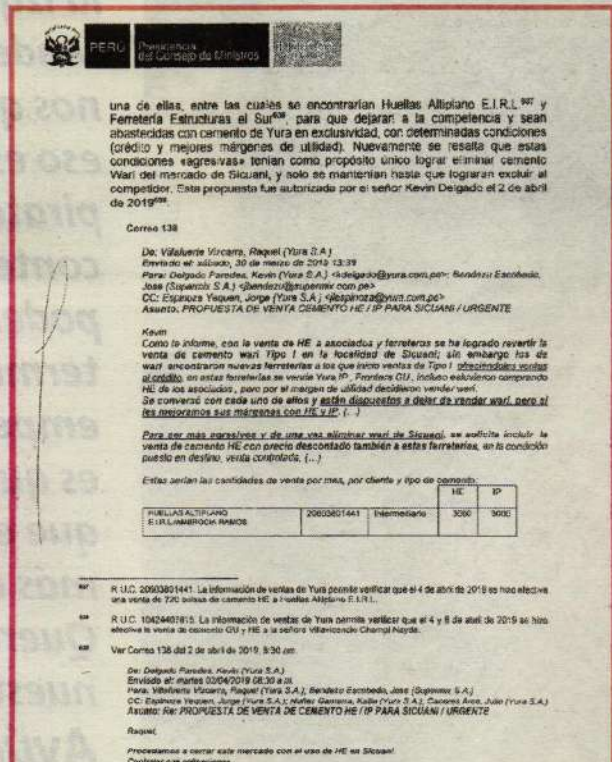
El primer paso del engranaje diseñado por Yura fue el seguimiento diario y exhaustivo de los camiones de carga que salían de las plantas de ambas empresas. Un promotor de Yura, Alexander Cari, lo narró así ante funciona-

rios del Indecopi: "Yo tenía que salir del almacén y caminaba hasta un punto específico (...) y esperaba simplemente que salieran las unidades (...) Los señores me pedían que venga a las 5 o 4 de la mañana para esperar al señor Dennis Caro, que tenía que grabar con un dron a la empresa Wari". El espionaje se ejecutaba hasta tres veces al día.

El coordinador zonal de Arequipa, Paul Martínez Castillo, declaró que la empresa les proporcionaba una camioneta para realizar los seguimientos. En otros casos, los



Correo electrónico enviado por Kevin Delgado, jefe comercial de Yura en noviembre del 2015: "Hemos utilizado taxis para hacer el seguimiento de los camiones de Wari y Rocatech y se les ha llamado de emergencia fuera de horario laboral, con mi autorización".



Correo enviado por Raquel Villafuerte Vizcarra, coordinadora comercial de Yura en marzo del 2019: "Ser más agresivos y de una vez eliminar a Wari de Sicuani".

trabajadores se movilizaban en taxis, según se desprende de un correo interno en el que Kevin Delgado, jefe comercial de Yura entre el 2014 y el 2019, reporta las "acciones de seguimiento" a sus superiores.

"Hemos utilizado taxis para hacer el seguimiento de los camiones de Wari y Rocatech y se les ha llamado de emergencia fuera de horario laboral, con mi autorización", dice el mensaje de Delgado.

Para no levantar sospechas en los reglados, Delgado solicitó a sus superiores retirar los logos de Yura de los vehículos. El pedido fue aprobado. La

empresa llegó a instalar una oficina dentro de un contenedor cerca de una planta de Wari para espiar a sus rivales sin que estos sospecharan.

Cuando los empleados detectaban que un camión que solía trabajar para Yura ingresaba o salía de las instalaciones de la competencia, se activaba una estrategia de veto y acoso destinada a impedir que los choferes siguieran prestando servicios a las cementeras rivales.

Si los choferes aceptaban trabajar únicamente para Yura, eran perdonados. "Una última oportunidad", decían los correos ultimátum que recibían los choferes. Indecopi identificó a 101 choferes amenazados o sancionados por Yura.

El otro frente de ataque se dirigía a ferreterías e intermediarios que ofrecían cemento de la competencia. Los promotores de Yura recorrían ciudades y distritos para detectar qué comerciantes vendían cementos distintos al suyo. Algunos ferreteros optaban por esconder el producto rival para evitar represalias.

Yura operaba de dos maneras. La primera consistía en ofrecer beneficios a cambio de exclusividad. Estos incluían bolsas gratuitas de cemento, créditos, el remozado de las ferreterías o transporte sin costo.

El segundo método era más agresivo. Si el comerciante rechazaba "la oferta", Yura colocaba camiones o alquilaba locales en las inmediaciones del ferretero discolo y allí vendía directamente su cemento. En otros casos desplegaba una "campaña de desprestigio" orientada a convencer al comerciante de devolver el cemento rival alegando "mala calidad".

Los correos electrónicos también revelaron que en situaciones extremas los trabajadores de Yura recurrían a seudosindicatos de construcción civil para presionar a las empresas que no utilizaban su cemento en las obras. Solo en noviembre del 2014 visitaron 137 obras en Tacna.

La ofensiva también se dirigía directamente contra las marcas rivales. En un correo Manuel Ampuero, supervisor de marketing de Yura, propuso la compra de 41 sitios web vinculados a las denominaciones

"Direpsur" y "Cementos Wari" para desaparecer a su competidor de internet.

Los mensajes muestran, además, que el equipo de marketing de Yura retiró paneles publicitarios de sus rivales en coordinación con las empresas dueñas de los carteles, a las que ofrecían mayores pagos por el alquiler del espacio.

En los documentos del Indecopi aparecen reiteradas menciones a Vito Rodríguez y a la "Alta Dirección".

"Hemos tenido acciones paliativas y resultados efectivos, pero no efectivos. La Alta Dirección ha dispuesto que lo referido a competencia se cierra sí o sí (...)", escribió Julio Cáceres Arce, gerente de gestión comercial de Yura.

En otro correo, Kevin Delgado señala: "Don Vito nos ha pedido que tengamos un acuerdo, contrato con clientes y ferreteros con la finalidad de darles un beneficio puntual a cambio de trabajar con nosotros en exclusividad".

Otra comunicación alude al acuerdo con la ferretería Serreser para que deje de vender cualquier cemento que no sea el de Yura. "Como referencia, esta es la ferretería que visitó Don Vito en Socabaya", se lee en el correo.

"Ser más agresivos y de una vez eliminar a Wari", "estamos atacando", "este mes ahógalos", son algunas de las frases que aparecen en los correos intervenidos por el Indecopi.

En otros pasajes se percibe el temor de los directivos a que estas prácticas salgan a la luz. "Evitemos que estos temas se abran a tanta gente", "que esta información no salga de nuestra manos ya que es riesgoso", escribieron en algunos correos.

Tres años demoró el Indecopi en confirmar la sentencia en segunda instancia contra Yura. La empresa anunció que llevará el caso al Poder Judicial y tiene un plazo de tres meses para presentar la apelación.

"Con la presentación de la denuncia más una carta fianza, los efectos de la multa se suspenden. Este caso, si se judicializa, tardaría unos cinco o seis años. Pero en el Poder Judicial la tasa de éxito del Indecopi es muy elevada. Allí se confirma más o menos el 90 o 95% de los casos", explica un abogado especialista en libre competencia. ■

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea.

Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.



Dona aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Por azares del destino, fui el miércoles a una clínica en El Polo a sacarme unos odiosos exámenes de rutina. Y me di cuenta de que, al lado, estaba el café que hace doce años usé como oficina para mis postulaciones al posgrado en Estados Unidos. Es un café amplio, espacioso y gélido, tan gélido que lo llamábamos "la congeladora". Sus paredes son ventanas que muestran la calle, su mesa mide ocho metros, y siempre –siempre– estaba vacío: por eso era un gran lugar para trabajar.

Entré, y seguía igual de gélido e igual de vacío. Me dio nostalgia. Allí pasaba horas de horas –desde las tres de la tarde hasta las once de la noche– intentando escribir un texto académico que nunca pude terminar. Pero lo más significativo de esos días no es eso, sino mi entusiasmo desmedido por el futuro. Uno que se perdió en alguna parte.

Sentía que, si lograba ser aceptado a la maestría o doctorado, se iniciaba un futuro asegurado e irreversible. Y ese entusiasmo, esa expectativa de futuro, me llevaba a sacrificar todo por conseguir ese objetivo.

Ahora que ya ha pasado algún tiempo, puedo mirar el pasado y el

Cuando el futuro parecía seguro



CARLOS LEÓN MOYA

presente con cierta perspectiva y con emociones mucho más medidas. Y me doy cuenta de que mi entusiasmo no era tan *naïve*, sino que tenía cierto fundamento.

En aquel entonces, 2012 y 2013, un posgrado en el extranjero en ciencias sociales o humanidades te aseguraba un trabajo bien remunerado al menos en el Perú. Muchos tenían como objetivo principal conseguir un puesto de profesor en las megacompetitivas universidades norteamericanas, y quedarse. En términos futbolísticos, sería como probarse en Europa y ser contratado por un club para jugar la Champions. Pero si no, siempre se podía volver al Perú a una universidad privada, pues había muchos puestos por llenar y uno llegaba fresco, joven, y con un grado académico mayor al de sus

profesores. ¿Escribir? Era posible. Había muchos medios escritos aún, y también podía pensarse en abrir nuevos mercados con los libros, como ocurría en otros países de la región.

Pero todo eso no es cierto ya.

La sobreoferta de personas con doctorados ha generado una competencia más feroz en Estados Unidos y Europa, que corre en paralelo a la disminución de los puestos disponibles para nuevos profesores e incluso al cierre de ciertas carreras. ¿El resultado? Doctores de universidades de élite buscando puestos en países improbables, y la ansiedad por un futuro que luce, profesionalmente, cada vez más difícil.

Y si uno es peruano, y regresa, se enfrenta a una nueva realidad: ya no hay cinco o diez doctores en tu

disciplina (digamos, ciencia política). Ahora son muchísimos más. Y si uno empieza su doctorado ahora, al terminar tendrá que competir con muchos más doctores en muchos menos puestos disponibles. Y también tendrá que lidiar con alumnos que leen cada vez menos, y que comprenden cada vez menos lo poco que leen. Y que tienen miedo a todo, una ansiedad cada vez más grande por un futuro profesional que aún ni empieza y ya les luce esquivo.

Pienso en todo eso y me recuerdo a mí mismo en esa mesa de ocho metros, imaginando un futuro asegurado si lograba ser aceptado en un posgrado. Y tenía razón, en ese momento. Para la generación de mi madre, un título universitario era tener un futuro seguro. La gente diez años mayor a mí decía que una maestría en el Perú les aseguraría un buen ingreso de forma permanente. Para la mía, un posgrado en el extranjero era la forma de asegurarse el futuro. Pero las generaciones que vienen tendrán que buscar otras formas, y ninguna es ya segura.

Y después alguien, como yo, empezará a hablar con desazón sobre el presente y con nostalgia sobre el pasado, una época en la que el futuro parecía seguro. ■

El general hebreo Nitzan Alon, el renunciante "zar de los rehenes" en Gaza, reconoció que "el fuego israelí mató a la mayoría de los cautivos en Jabalia".

También esclareció el caso de una familia con derecho al pasaporte peruano: la de Margit Schneider (nacida en Lima en 1960), su esposo Yossi Zimmerman, su yerno Yordan Bibas, su hija Shiri y sus nietos Ariel (4 años) y Kfir (9 meses). Ellos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Todos murieron, menos Yordan.

En febrero de este año Benjamín Netanyahu anunció que los bebés Bibas, símbolos del movimiento pro liberación de los retenidos, fueron descuartizados por Hamás. Sin embargo, Alon afirma que Hamás no los capturó (sino un pequeño grupo marginal) y que, más bien, "informaron al Hamás quiénes fueron los secuestradores para que pudiesen localizar y retornar sus cuerpos", por lo cual ya sabían que habían muerto. Hamás asevera que ninguno de ellos fue ejecutado por sus captores, sino que murieron por bombardeos israelíes en noviembre de 2023. Las aseveraciones oficialistas nunca fueron corroboradas por una entidad independiente. La familia Bibas impidió que representantes del

Rehenes traicionados

gobierno vayan al funeral demandando a Netanyahu a no usar esa tragedia para sus personales propósitos.

Si Margit hubiera acabado la secundaria en Lima, ella se hubiera graduado en la promoción Yonatan Netanyahu, del Colegio León Pinelo. Yonatan fue el hermano mayor del actual primer ministro israelí, quien en julio de 1976 ofrendó su vida para rescatar a casi todos los rehenes secuestrados en Entebbe (Uganda). De los originales 248 pasajeros capturados, solo cuatro murieron. Sin embargo, el hermano menor de quien comandó dicha operación hizo lo opuesto. En vez de concentrarse en salvar a los rehenes se dedicó a detonar en la Franja el equivalente de 13 bombas atómicas arriesgando la sobrevivencia de sus compatriotas.

La rehén Chen Goldstein-Almog fue rescatada por Hamás de los escombros

producidos por bombas israelíes. Tres capturados que se liberaron fueron asesinados por su propio ejército en diciembre de 2023, pese a que gritaban en hebreo con las manos levantadas. Muy pocos cautivos fueron rescatados militarmente. La guerra no buscaba liberarlos sino pulverizar Gaza.

De los 251 cautivos originales, 87 perdieron la vida. Mientras en el operativo donde cayó Yonatan Netanyahu murió menos del 2% de los cautivos, Benjamín, quien nunca combatió en Gaza, logró que el 35% de ellos falleciese (especialmente por sus bombardeos).

Numerosos medios hebreos informaron que durante el 7 de octubre de 2023 el ejército israelí recibió la orden de matar rehenes hebreos antes que dejar que sean capturados y utilizados como ficha de negociación. Esto es algo que luego confirmaría Yoav



ISAAC BIGIO

Gallant, ministro de defensa. Nadie sabe cuántos de los 1,200 israelíes muertos ese día fueron víctimas de su propio ejército, aunque muchas fotos evidencian que decenas de autos fueron carbonizados desde el aire y que varias casas fueron destrozadas por tanques, una capacidad de fuego que no tenían los palestinos que solo entraron con armas portátiles.

El 7 de octubre de 2023 fallecieron dos peruanos: el médico limeño Daniel Levi (por socorrer heridos) y el reservista pucallpino Brandon Flores (quien adquirió la ciudadanía israelí solo porque uno de sus cuatro abuelos era judío). El 22 de enero de 2024 el sargento trujillano Yuval López cayó en combate. Pertenecía a los "judeo-incas", una comunidad de católicos mestizos convertidos al judaísmo, quienes fueron sacados de la pobreza peruana para ser trasladados a la Cisjordania ocupada donde recibieron vivienda, educación y salud subsidiadas y armas para confrontar a la población nativa. Flores vivía en Kfar Tapuach, una colonia sionista influenciada por los seguidores del difunto rabino Meir Kahane, quien fuera considerado terrorista en su natal EE.UU. por atacar árabes y demandar su aniquilamiento. ■

Victoria Gracia

Cántame, yo te he pagado, exigió el gringo. Olivia tenía 81 años y era sabia del pueblo shipibo-konibo, onaya, en su idioma. Dos disparos retumbaron en la comunidad Victoria Gracia, y Olivia se derrumbó en el piso. Su tumba queda en un cementerio informal, sobre una lomita. Una cruz y una infografía

juicio por la muerte del gringo. Como maestro le tocó ayudar a sus niños a procesar lo ocurrido.

Al igual que muchos amazónicos, Hilario vio por primera vez el mar ya de adulto. Me enseñaron una foto suya con el cuerpo brillante de agua, una estrella de mar en las manos y el rostro de hombre feliz. Ahora hay

noches en las que no puede conciliar el sueño.

Después del asesinato de Olivia y el linchamiento de Sebastián, fue como si Victoria Gracia pasara de la invisibilidad a la existencia. En la escuelita de Hilario los niños recibían sus clases bajo la sombra de un árbol. No tenían ni bancas para sentarse. Tampoco libros. La comunidad quiso aprovechar ese breve tránsito al ser, buscando algo de atención de las autoridades. Pedir infraestructura y servicios básicos les pareció un exceso, así que se conformaron con gestionar madera y materiales de construcción para mejorar su escuela. Para desgracia de Hilario, el gobierno regional les donó madera.

Pasaron los meses y la madera comenzó a pudrirse bajo la humedad implacable de Ucayali. Las familias no podían empezar la construcción porque no tenían herramientas, clavos, calaminas, recursos para el aserrado. Hicieron una asamblea y decidieron vender una parte de la madera para con ese dinero avanzar en la construcción. El acta de esa asamblea es la principal prueba de cargo con la que Hilario se juega seis años de cárcel y su inhabilitación como docente por el delito de peculado.

La Constitución menciona el derecho a la identidad cultural y el Código Penal considera el error culturalmente condicionado. Este contempla situaciones donde las personas por su contexto cultural actúan sin ser conscientes de que están cometiendo un delito, lo que claramente ocurrió en Victoria Gracia.



MAR PÉREZ

¿Cómo si no alguien podría cometer la imprudencia de consignar en un acta de asamblea la decisión consensuada de cometer un delito?

Pero para la fiscalía Hilario dejó de ser indígena cuando estudió en la universidad y concursó a un puesto público. La justicia intercultural es un hermoso artefacto que se discute en las aulas y se condena al destierro en los tribunales. En este reino de lo absurdo se viene impulsando un proceso que cuesta más a los contribuyentes que el valor de la madera donada a Victoria Gracia.

En nuestro querido país faltan 26,000 docentes de lenguas indígenas. En las zonas rurales solo el 13% de los estudiantes alcanzaron los niveles esperados de comprensión lectora y matemáticas, el 40% de las escuelas no reciben libros y el 23% de las mujeres mayores de quince años son analfabetas. La violencia sexual a manos de los docentes contra estudiantes awajún y wampís está a la orden del día en Amazonas. No podemos permitirnos el lujo de perder a un profesor como Hilario, comprometido con su comunidad, orgulloso de lograr que sus estudiantes más grandes salgan leyendo. La justicia no debe ser ciega a la diversidad cultural de nuestro país.

Pero, sobre todo, se requiere destinar los mayores esfuerzos a la educación rural e intercultural, pues los déficits en este campo son un claro factor de inequidad. Para Sandel la educación no es solo una herramienta de movilidad social, sino uno de los pilares ideológicos que legitiman la desigualdad en las sociedades contemporáneas. Mi viejo siempre me dijo que mi herencia era mi educación. Después entendí la suerte que tuve, un privilegio que no comparten muchas niñas y niños del Perú que deben hacer sus proyectos de vida con una clara desventaja.

La educación es cada vez más un negocio donde se vende sebo de culebra a familias que se esfuerzan por dar a sus hijos una vida mejor. Pero nunca debemos olvidar que la educación es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. En el caso de los pueblos indígenas este derecho tiene además el carácter de una deuda histórica por un expolio que lleva siglos saqueando sus territorios y sometiéndolos con violencia.



Olivia Arévalo Lomas, lideresa asesinada. Tenía 81 años.

con su imagen señalan el lugar. Dicen que en las noches se oye su voz ronca entonando un ícaro.

El mismo día de su entierro lincharon al gringo Sebastián. En el video se le ve desnudo, ensangrentado y arrastrado del cuello por una soga. Se escucha que llama a su madre. Tiempo después la justicia de saco y corbata supo que para matar a Olivia había alquilado el arma de un policía.

Hilario era director en la escuelita de Victoria Gracia cuando todo esto pasó. Lo llamaron como testigo en el

EN NUESTRO QUERIDO PAÍS FALTAN 26,000 DOCENTES DE LENGUAS INDÍGENAS

RECESO DE FIN DE AÑO

Les damos un breve descanso. Volvemos el 9 de enero.

Felices Fiestas

Como siempre, las suscripciones se extenderán automáticamente por el número de ediciones que estemos fuera.

La democracia peruana se desarma



GUIDO LEONARDO CROXATTO

El curioso arresto de Luis Arce en Bolivia, tanto como la repentina liberación de Jeanine Áñez el mismo día de la asunción del presidente prohijado por Milei, Rodrigo Paz, muestra que la justicia no solo es cada vez más “permeable” a los tiempos de la política sino que está determinada por esta casi por completo. El voto del congreso de Brasil para reducir la pena a Bolsonaro en su práctica totalidad es otro ejemplo. Los congresos parecen sobreponerse e imponerse cada vez más a la labor de la justicia independiente. Perú es un ejemplo (un triste “modelo”). No parece haber magistratura independiente.

La destitución e inhabilitación de la Fiscal de la Nación, la Dra. Delia Espinoza, es un hecho de suma gravedad institucional para Perú.

En primer lugar, sorprende la rapidez con la que el Congreso ha actuado en su caso. Muchas medidas tomadas por el fiscal interino Tomás Gálvez, luego de inhabilitar a Espinoza, pueden servir, por contraste, para evaluar el verdadero objetivo detrás de la aparente excusa formal empleada (la no restitución de una fiscal destituida, que había sido acusada de liderar una organización criminal y plagió gran parte de su tesis, además de acreditar créditos por cursos de cosmética).

El fiscal interino acaba de “desactivar” comisiones especiales que investigan crímenes financieros de magnitud. El argumento empleado fue que estas comisiones ya habían “cumplido su ciclo”. Es curioso que las comisiones se desactiven luego de “un tiempo”. Porque nunca concretaron sus objetivos. Aunque en su mirada hayan cumplido “su ciclo”. No se activan para cumplir “ciclos” sino lograr “objetivos”, Dr. Gálvez. Hay que mostrar los resultados logrados. No alcanza con solo “durar”. Si los resultados aún no se han logrado, no se las debería “desactivar” antes de eso, sino después. ¿Por qué se las “des-

activa” antes de Navidad? ¿A quién le habla? ¿Con quiénes negociaron “desactivar” esas investigaciones?

En el Congreso, muchos parlamentarios han denostado a la Fiscal de la Nación diciendo: “esta señora nos abre carpetas, nos investiga, esta señora está demente”. ¿Demente porque los investiga? ¿No es esa su función? Pareciera que en Perú hay un código tácito: de



Fiscal Delia Espinoza: lo que han hecho con ella es una advertencia para todos.

un lado las reglas, que nadie con poder cumple; del otro, la impunidad: al Congreso nadie le pone un freno, nadie lo investiga. Tampoco –ni siquiera– el Fiscal de la Nación. Él tampoco puede. Pareciera que Espinoza está pagando el precio de haber hecho bien –no mal, sino muy bien– su trabajo de fiscal. Paradoja. La han destituido e inhabilitado por “abrir carpetas” a los congresistas. Los investigados inhabilitan a la fiscal que los investiga. Parece una contradicción normativa y ética. Un claro conflicto de poderes.

Esto se agrava si quienes deben resolver o intervenir en este caso, como en tantos otros donde con Eugenio Raúl Zaffaroni nos ha tocado participar como abogados, aparentan tener parcialidad manifiesta. El Tribunal Constitucional de Perú, que en algún fallo reconoce que la vacancia de Pe-

dro Castillo fue un acto “simbólico”, es un tribunal cooptado, no imparcial. No ofrece garantías. No hay, en consecuencia, acceso jurisdiccional serio para que la fiscal pueda impugnar con criterio técnico la medida que la destituye. No le sucede solo a ella. También a otros dirigentes les ocurre lo mismo: no tienen ninguna instancia formal seria donde presentarse.

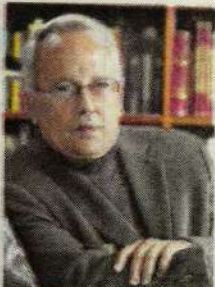
Siempre hemos creído importante separar las motivaciones políticas de las jurídicas. Pero en Perú pareciera que la “politización” amenaza con desvirtuar y desnaturalizar cualquier proceso jurídico. Que es imposible hacer defensas legales rigurosas, porque por buenos que sean nuestros argumentos, por detallados que fueran, se chocan siempre de frente con un muro imposible de franquear: la política con sus reglas “tácitas”. Una de esas reglas extrajurídicas, implícitas, es que al Congreso nadie lo investiga. A sus miembros nadie los puede conducir a un proceso. El Congreso, en cambio, tiene carta blanca para vacar presidentes, inhabilitar opositores o destituir a la Fiscal de la Nación sin los votos necesarios. Casi cualquier cosa, incluyendo limpiar el prontuario de Dina Boluarte pocos días antes de la “sucesión” presidencial, que fue irregular, ya que la vacancia no contaba, como dije, con el piso mínimo de votos que manda la ley (en este caso, el reglamento del propio Congreso).

El sistema interamericano es cómplice de este retroceso en las garantías. Porque no han otorgado en muchos años ninguna medida cautelar de peso a los recurrentes. Solo han otorgado una: a la exfiscal Patricia Benavides, cuando había un dron cerca de su casa (a Castillo lo han

filmado en el patio de Barbadillo horas enteras con drones, nadie hace nada, lo pasan en “prime time”). Pero cuando otros colectivos peruanos recurren al sistema, sorpresivamente chocan con un muro de indiferencia. El doble estándar parece apoderarse también del mismo. La fiscal Delia Espinoza, que ha denunciado reglaje, no obtiene por el momento la misma atención que obtuvo en su momento la fiscal Patricia Benavides. Tal vez porque el contexto político no es el mismo. Hasta podría pensarse que la fiscal Espinoza fue desplazada pocos meses antes de la “vacancia exprés” de Castillo precisamente para esto: para que no fuera ella la fiscal durante el “procedimiento” inconstitucional que terminó con la vacancia ilegal del primero. Es de esperar

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

LA HAN DESTITUIDO E INHABILITADO POR “ABRIR CARPETAS” A LOS CONGRESISTAS



Olores

El rufián que tiene el extenso alias de "Fiscal interino de la Nación" ha anunciado que desactivará antes de fin de año a los equipos especiales, empezando por el de Lava Jato. Rafael Vela ha dicho, con razón esta vez, que eso demostrará que la Fiscalía es la mesa de partes del Congreso (del hampa).

El canalla conocido con el alias de "Defensor del Pueblo" sigue peleando por la liberación de Daniel Urresti, comprometido en el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

La banda de sabandijas que actúa bajo el título de Junta Nacional de Justicia ha planteado un cambio constitucional que le permita estar por encima de la ley y no ser susceptible de intervención alguna del poder judicial en el caso de que sus sentencias sean, como es el caso, mafiosas y encubridoras.

La foraja abogadil que se hace llamar Tribunal Constitucional, surgida de la sentina de Fuerza Popular, decidió hace poco que el poder judicial no puede ejercer el control difuso en los casos de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles según la ley internacional y los acuerdos suscritos por el Perú.

El jefe de la vasta pandilla conocida como Congreso de la República lucha desde octubre para que se apruebe en estos días el proyecto que les permitirá a policías, oficiales y soldados matar manifestantes sin siquiera ser investigados. Ya no se trata de leyes procrímenes sino de licencias para el exterminio.

Este es el Perú de hoy. No me vengán con vainas ni con comentarios relamidos. El Perú -mi país, mi fardo, nuestra pesada mochila- huele mal. Huele a rancio. Huele a comienzos

de la república, a milicos peleándose el botín, a oligarquías que nunca amaron la tierra que les daba fortunas. Huele a quienes se escondían en sus casas para no estar en la última batalla de Lima. Huele a la farsa de Piérola, a quienes le negaron ayuda a Cáceres. Huele a Lizardo Montero, pundonoroso en su huida, y a Agustín Belaunde, coronel desertor de Arica. Huele a historiador tembloroso que no puede decir la verdad porque no quiere problemas y aspira a que lo sigan invitando. Huele a la llamada "república aristocrática" fundada en la explotación extrema y la usurpación de territorio comunal. Huele a Leguía y a promesa rota y a nuevo civilismo plutocrático disfrazado de anticivilismo. Huele, en fin, a derecha chueca apostando por los privilegios y pidiéndole al señor de los milagros que cambien los apellidos y los rostros pero que no cambie el choleo, las ciudadanías de segunda, los tratos de tercera, las plebes esperando.

Mi país huele a mentira, a autocomplacencia y a fracaso. No importa cuántas montañas de oro o cobre vendamos ni cuántos arándanos seamos capaces de exportar: no somos un país integrado y la batalla cultural la ha ganado una derecha multipropósito que mensajea sus lemas de terruqueo y sus advertencias fulminantes sobre una masa alegremente sumergida en la ignorancia.

Y ahora vienen las elecciones, que son la suma de todas nuestras derrotas. Casi 40 personajes, personajillos y pobres diablos aspiran a llegar al palacio desde el que no podrán gobernar porque, dada la fragmentación, volverán a ser rehenes de un próximo Congreso del hampa. Desde esas curules, que Grau escupiría, se aceptará lo que convenga, se rechazará lo que ponga en peligro "el sistema" y se promulgarán las leyes que los afortunados de toda la vida exijan. Volverán las oscuras golondrinas a tomar las decisiones que los lobbies sugieran y un vaho de componenda volverá a asfixiarnos.

¿Hay salida? Quiero creer que sí. Doscientos años después de tanta sinfonía inconclusa, ¿seremos capaces de producir un liderazgo robusto que enrole a los mejores, que proponga metas y cambios razonables, que produzca algún entusiasmo que no sea

exclusivamente limeño? ¿No tenemos por allí a alguien que mire al Perú como el país complejo, diverso y contradictorio que es? ¿Podremos encontrar a alguno que tenga el coraje de redistribuir la renta, que es la manera fina de decir que los ricos paguen lo que deben (sin dejar de ser ricos)? ¿No tenemos por allí a un sujeto sorprendente que venga de lo mejor de Castilla, de Pardo, de Cáceres? Sueño con eso.

**NO IMPORTA
CUÁNTAS
MONTAÑAS DE ORO
O COBRE VENDAMOS
NI CUÁNTOS
ARÁNDANOS
SEAMOS CAPACES DE
EXPORTAR**



"Paciente inconsciente (alegoría del olfato)", pintura de Rembrandt circa 1624.



Lo ocurrido en una playa de Sídney, en Australia, es un atentado terrorista atroz. Es además un ataque antisemita. Al menos 15 han sido las víctimas mortales (incluida una niña de 10 años) y se cuentan por decenas los heridos. Los perpetradores, un padre y su hijo, al parecer estarían vinculados o influidos por el Estado Islámico y su ideología extremista.

El objetivo de los atacantes era la comunidad judía australiana que se reunía ese día en la playa Bondi para celebrar la Jánuca. En esta festividad judía se conmemora la reedificación del Segundo Templo de Jerusalén (tras el retorno del cautiverio en Babilonia) y la rebelión de los Macabeos (familia de sacerdotes judíos) contra el imperio Seléucida.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha intentado aprovechar el execrable atentado para los fines políticos de su gobierno. Netanyahu ha responsabilizado al primer ministro australiano Anthony Albanese porque, según él, el reconocimiento de Australia al Estado palestino ha "fomentado el antisemitismo" en ese país.

El antisemitismo en occidente ha venido creciendo en la última década, en especial debido al auge de las derechas

Atentado antisemita

extremas y radicales. Pero si hay algo que ha fomentado el antisemitismo en algunos sectores de la izquierda radical a partir del 7 de octubre de 2023 ha sido el genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

El establecimiento de un Estado palestino es lo que prescribe el derecho internacional y lo que apoya la comunidad internacional en su virtual totalidad. La solución de los dos Estados ha sido incluso respaldada por todos los gobiernos de EE.UU. (aunque Trump podría ser la excepción) por lo menos desde 2002, cuando era presidente el republicano George W. Bush.

Ese reconocimiento no es, ni puede ser, antisemitismo. Es sencillamente un acto de justicia y de reparación. El antisemitismo es real y está creciendo,

pero al mismo tiempo es repulsivo que sea instrumentalizado para silenciar a quienes apoyan el derecho a la autodeterminación de los palestinos o a quienes denuncian el genocidio en Gaza.

Pero también es de vital importancia que analistas y comentaristas hagan una clara distinción entre lo que es y no es antisemitismo. Ello por tres razones: para combatir el antisemitismo auténtico; para apoyar la causa palestina sin ser acusado de antisemitismo; y para estar alertas de que la defensa de la causa palestina no cruce la línea roja del antisemitismo.

El atentado reciente en Australia es condenable, entre otras razones, porque los judíos del mundo no son responsables por las acciones del Estado de Israel. Muchos de ellos se oponen



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

a esas acciones, pero incluso en el caso de que las apoyaran, no son de ninguna manera un blanco legítimo. Como tampoco lo son los civiles israelíes.

Si las palabras del presidente de Israel, Isaac Herzog, apenas ocurrido el atentado del 7 de octubre fueron vituperables, fue precisamente porque no hacían distinción alguna entre los combatientes de Hamás y los civiles de Gaza. Los civiles no son blancos legítimos, en ninguna circunstancia, sin importar su identidad, nacionalidad o religión.

Por último, es necesario llamar la atención, en medio de la tragedia del atentado reciente y de las familias enlutadas, sobre el hecho de que haya sido un inmigrante musulmán de origen sirio el que, arriesgando su vida, arrebatara el arma a uno de los atacantes. Ahmed al Ahmed yace ahora en una cama de hospital recuperándose de dos heridas de bala.

El hecho revela que no es el islam, no son los musulmanes, los enemigos *per se*, como tampoco lo son los judíos o cualquier otro grupo humano. Los enemigos son los extremismos, que los hay en todas las religiones e incluso entre movimientos políticos seculares, como lo fueron el estalinismo y el nazismo en su momento. ■

Y ahora una noticia terrible, como para culminar el año bien a tono. Hace unas semanas, la Fiscalía de Milán abrió una investigación relativa a unos supuestos "safaris humanos" que habrían tenido lugar durante el asedio de Sarajevo, en la década de 1990. Según la información, la denuncia habría sido presentada por el periodista Ezio Gavazzeni, quien escarbó en numerosos testimonios que revelarían una supuesta red de millonarios que pagaban elevadas sumas de dinero al ejército serbobosnio para tener la oportunidad de disparar contra la población civil de la ciudad sitiada.

En realidad, los rumores sobre esto venían dando vueltas desde hacía décadas. Y no era para menos: el asedio a la ciudad es considerado el más largo de la historia de las guerras modernas (duró del 6 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996) y se calcula que más de 11,000 personas perdieron la vida, la mayoría de ellos civiles, abatidos mientras salían a buscar agua o alimentos. Las colinas circundantes estaban infestadas de francotiradores con órdenes de disparar a todo lo que se movía. Desde entonces se decía que algunos de esos disparos no provenían

Turistas de la muerte

de soldados, sino de turistas dispuestos a pagar montañas de dinero por experimentar el nefasto lujo de matar seres humanos.

El asunto llegó a la opinión pública internacional en 2007, en el contexto del juicio contra el líder serbio Slobodan Milosevic en el Tribunal de La Haya. Un bombero voluntario fue el primero en referirse, en plena audiencia, a lo que entonces llamó "tiradores turísticos" o "turistas de la guerra". Según su testimonio, durante su estancia en Sarajevo, a veces se cruzaba con un tipo particular de francotiradores que se distinguían del resto por su vestimenta, sus armas y el modo en que eran guiados por los locales. Se notaba que eran novatos. Su ropa y equipamiento le hacían recordar a los safaris de caza.

A partir de estas declaraciones, los rumores sobre turistas pagando el equivalente a entre 80,000 y 100,000 euros como precio base por participar de la cacería humana se fueron haciendo cada vez más fuertes. En 2022, el cineasta esloveno Miran Zupanec estrenó el documental "Sarajevo Safari", una meticulosa investigación que además pudo recoger el testimonio de un exagente de inteligencia esloveno que mantuvo silencio por más de 30 años, quien aseguró haber sido testigo de siete de estas excursiones.

Protegido por el anonimato, describió cómo militares lo condujeron a posiciones de tiro donde hombres extranjeros, gerentes y reputados hombres de negocios apuntaban con miras telescópicas hacia la ciudad. El ambiente, antes y después de cada dis-



PEDRO CASUSOL

paro, era de silencio absoluto, seguido de una potente mezcla de adrenalina, poder y euforia, como si se tratara de una poderosa droga. Según el exagente, este servicio de cacería humana se encontraba perfectamente organizado. Participar costaba cerca de 100,000 euros. Sí, disparar a civiles tenía ese valor. Pero contra un niño era más cotizado.

Otro testimonio que recoge Zupanec es el de Edin Subasik, analista de inteligencia bosnio que interrogó a un joven soldado serbio que llegó a la ciudad junto a cinco hombres que no eran militares (tres de ellos se identificaron como italianos), quienes habrían pagado una buena suma para viajar a Sarajevo por un fin de semana, disparar a civiles y después regresar a su vida como si nada. El crimen de guerra como consumo de transgresión.

La denuncia de 17 páginas presentada por Gavazzeni, aceptada hace unas semanas por la Fiscalía de Milán, afirma que estos turistas de la muerte eran ciudadanos próximos a círculos de extrema derecha y apasionados por las armas. Justo el tipo de personas que parece haber capturado el poder en el mundo. Así que, si desean deprimirse estas fiestas y perder la fe en la humanidad, los invito a buscar el documental en YouTube. ■

El Mandela palestino



DANIEL ESPINOSA

Un reciente editorial de "The Guardian" señala que el destino político de los palestinos está estrechamente unido al destino de Marwan Barghouti, también conocido como el "Mandela palestino". Barghouti lleva casi veinticuatro años atrapado en el sistema carcelario israelí, que B'Tselem –el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados– define acertadamente como "una red de campos de tortura".

En su reporte titulado "Bienvenidos al infierno" (04/08/24), B'Tselem pudo entrevistar a cincuenta y cinco palestinos que padecieron en las mazmorras operadas por el ejército de la ocupación; la mayoría de ellos, dice el informe, fueron detenidos, torturados y hambreados a pesar de que nunca se levantaron cargos en su contra. El mismo Barghouti, encarcelado durante la Segunda Intifada tras haber pasado por un juicio por terrorismo que organismos observadores internacionales estimaron amañado, ha sido sistemáticamente torturado.

Su historia de resistencia y activismo, que comenzó cuando tenía solo quince años y se integró a Fatah –la organización política y militar fundada por Yasir Arafat–, comprueba que el trato dado hoy a los palestinos en las cárceles israelíes no cambió con el inicio del genocidio, sino que solamente recrudesció en su brutalidad, extremando formas de degradación que los valores de la modernidad repudian. En octubre de este año, la familia de Barghouti denunció que el palestino fue asaltado cobardemente por ocho guardias israelíes, quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

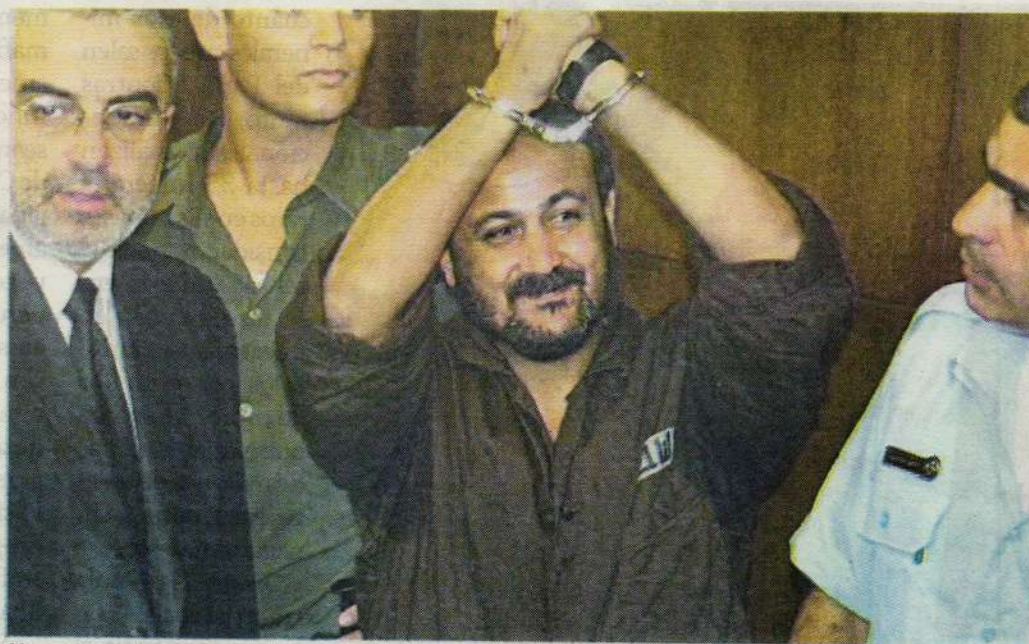
El régimen ultraderechista israelí detesta a Marwan Barghouti, nacido en Ramala, Cisjordania (1959), porque su capacidad de liderazgo y su popularidad entre los palestinos de distintas facciones y preferencias políticas representa una "amenaza de paz". Durante más de setenta años, la propaganda occidental ha presentado al gobierno israelí como empeñado en llegar a acuerdos con los

palestinos, objetivo siempre frustrado por una supuesta incapacidad de los segundos. La realidad, a diferencia de la "historia oficial", apunta en la dirección opuesta.

Con el poder y la impunidad de su lado, a Israel nunca le convino llegar a acuerdos, sino continuar con su limpieza étnica de Palestina, su ocupación ilegal de Cisjordania y su sitio igualmente ilegal de Gaza, que terminó convirtiéndose en el genocidio que el

mundo viene presenciando. Israel no necesita ni desea la paz porque tiene el poder. No necesita negociar porque puede imponer su voluntad.

Tel Aviv tiene al gigante norteamericano cuidándole las espaldas, vetando una y otra vez –en contra del consenso mundial– toda iniciativa internacional o resolución de Naciones Unidas que pudiera reconocer y hacer efectivo un Estado Palestino. La gran prensa juega un rol fundamental: le vende al



Marwan Barghouti: 24 años de carcelería.

mundo el cuento orientalista de que los palestinos y sus líderes históricos son incapaces de llegar a acuerdos. En general, los árabes tendrían una tendencia genética al extremismo, la irracionalidad y la violencia. Esa es la farsa racista que, en Occidente, los diarios conservadores repiten en voz alta y los diarios liberales comunican entre líneas.

Barghouti es una amenaza porque su liberación podría suscitar la unidad política de las víctimas de la ocupación, unidad a la que el régimen Netanyahu se opuso financiando y promoviendo a Hamás con el objetivo de crear una división política entre la Franja de Gaza, donde la agrupación islamista se hizo del liderazgo en 2006, y Cisjordania, donde gobierna la corrupta Autoridad Palestina de Mahmud Abás, que el editorial de "The Guardian" mencionado tilda de "contratista de seguridad al servicio de Israel en Cisjordania".

"The Guardian" acierta al realzar la figura de Barghouti (cuya liberación fue exigida por unas doscientas figuras de la cultura mundial a principios de diciembre) y también al señalar el temor del régimen israelí a tener delante a un interlocutor válido y universalmente aceptado, pero falla estrepitosamente al proponer que Donald Trump debería incluir la liberación del "Mandela palestino" en sus "planes de paz" para la región.

Al hacerlo, el diario británico reafirma el supuesto rol de Estados Unidos como "policía global", presentando a Washington como mediador legítimo, como si no fuera cómplice indispensable del genocidio gazatí; como si la Casa Blanca no se hubiera pasado décadas saboteando sistemáticamente todos los esfuerzos internacionales por reconocer a Palestina. Apelando a la "buena voluntad" de Trump –cosa que, por supuesto, no existe–, "The Guardian" también le lava la cara al "alto al fuego" en Gaza.

Pero ese supuesto "alto al fuego" no ha sido más que otra estratagema de relaciones públicas. A diferencia de otras operaciones de propaganda digitadas por el universalmente detestado régimen Netanyahu, la farsa del "alto al fuego" sí ha tenido éxito: desde el pasado 10 de octubre, cuando se concretó el "Plan Trump" para Gaza, la gran prensa viene fingiendo que la matanza, el hambre y la limpieza étnica cesaron, mientras la "comunidad internacional" –eufemismo con el que Estados Unidos se refiere a sí mismo, a sus estados clientelares y a varias instituciones subordinadas– mira a un costado.

"Por fin tenemos paz en Medio Oriente", declaró el presidente estadounidense con motivo del acuerdo firmado en octubre. El problema es que, desde entonces, Israel ha violado el cese a las hostilidades unas quinientas veces, matando a un número de palestinos que ya roza los cuatrocientos. "El mundo no debe dejarse engañar. El genocidio no ha terminado", dijo al respecto Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los acuerdos del pasado octubre incluyeron la liberación de unos dos mil prisioneros palestinos (muchos de ellos podrían ser definidos como "rehenes", pero el doble rasero imperante exige que tal definición sea aplicada solo a los israelíes), sin embargo, Marwan Barghouti permanece tras las rejas porque, como Nelson Mandela, el palestino es un símbolo de lucha y un recordatorio de que el *apartheid* sigue siendo parte de la psicología y la visión del mundo occidentales.

ESA ES LA FARSA RACISTA QUE, EN OCCIDENTE, LOS DIARIOS CONSERVADORES REPITEN EN VOZ ALTA Y LOS DIARIOS LIBERALES COMUNICAN ENTRE LÍNEAS

Aliados especiales de Trump



PEDRO FRANCKE

Trump declara al Perú como un "aliado principal". Es obvio que no lo hace por defender la democracia, los derechos humanos o la salud pública global, porque está clarísimo que Trump niega esos valores universales. Su Estrategia de Seguridad Nacional aprobada recientemente es muy insistente en señalar que todo se orienta al interés y seguridad de los Estados Unidos y de

manos de los rusos y han pactado con Australia para tener acceso seguro a sus minerales críticos. Mientras tanto, ni este gobierno congresal del fujimorismo ni Jerí han soltado siquiera una idea vaga sobre el tema, a diferencia de Chile que con Boric aprobó su Estrategia de Litio 3 años atrás. No es que sea algo fuera del radar. "Los nuevos minerales estratégicos que salen sin dejar huella" se llama el informe que dos ONG publi-

caron hace siete meses revelando cómo la SUNAT no sabe cuánto de esos minerales críticos salen del Perú. Mientras tanto, las transnacionales sí analizan hasta 35 minerales raros en sus minas y, considerando solo el telurio (un elemento raro que hay en nuestro suelo junto a los concentrados de cobre), se estima que varias decenas de millones de dólares salen del país sin pagar impuestos.

Dada la nula transparencia con la que se maneja el tema, parece que el cogollo trumpista

está detrás del botín. Durante el 2025, en el gobierno norteamericano, la cantidad de tratos bajo la mesa que Trump ha hecho para beneficiarse directamente él, su familia o algunos de sus amigos oligarcas es tremenda. Por ejemplo, en los aranceles que impuso Trump a todos los países del mundo le dio ventajas a Pakistán luego de que ese país firmara un oscuro acuerdo de inversión con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas propiedad mayoritaria de la familia Trump, cuyo director ejecutivo es el hijo de Steve Witkoff, el socio millonario que Trump ha nombrado como negociador para el Medio Oriente y Rusia. En recientes negociaciones con Rusia, Witkoff tuvo conversaciones reservadas con un empresario corrupto amigo de Putin. Podemos fácilmente deducir que si quienes negocian son ellos y no representantes oficiales de las cancillerías es porque hay plata de por medio. Tratos corruptos de Trump hay

muchos más. Otro ejemplo es cómo el fondo de inversión del yerno de Trump, Jared Kushner, recibió miles de millones de dólares de Catar, Arabia Saudita y Abu Dabi, mientras Trump sabotea los acuerdos internacionales orientados a reducir el consumo mundial de petróleo para mitigar el cambio climático. Con esos antecedentes y lo que sabemos de la corrupción en nuestro país, ¿cómo no pensar que estas negociaciones secretas pueden terminar con la familia Trump dueña del negocio y algunos gobernantes peruanos llevándose varios millones para sus bolsillos?

En los pronunciamientos oficiales se dice que esta declaración de "aliados" es porque EE.UU. y Perú van a reforzar sus "vínculos en seguridad y defensa". ¿"Vínculos"? Pero qué linda palabra, tan amable, tan respetuosa, tan considerada. La realidad es otra. Se trata de la "seguridad y defensa" de los Estados Unidos, con sus tropas y armas en nuestro suelo, las que desplegarán a su antojo gracias al permiso oficialmente concedido por este Congreso mafioso. Con ese poder Trump podrá amenazar y, llegado el caso, atacar en función de sus propios intereses, ya sean minerales raros, cobre o el puerto de Chancay. ¿Alguien cree que mi imaginación va demasiado lejos? Trump ya amenazó a México, cuya fuerza militar y económica es varias veces mayor a la peruana, con hacer acciones armadas en su territorio. Lo mismo ha hecho con Venezuela y Colombia. Como pirata se robó un buque con petróleo venezolano. Ya mató a más de noventa personas entre el Caribe y el océano Pacífico pretextando luchar contra las drogas mientras libera al "capo" narcotraficante y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Se nos quiere vender la idea de que EE.UU. va a ayudar a detener la criminalidad en el Perú. La verdad es que a Trump eso le interesa un pepino. No hay un solo país en Latinoamérica donde haya habido una colaboración estadounidense significativa contra bandas criminales. Incluso más allá de su voluntad, ¿acaso ellos han logrado frenar el tráfico de fentanilo que circula masivamente por sus ciudades? No. Quien ha logrado reducir los homicidios en 37 por ciento en un año ha sido Claudia Sheinbaum en México defendiendo su soberanía y sin permitir el ingreso de tropas norteamericanas.

Trump es un imperialista brutal que busca rapiñar nuestros recursos. Está detrás de nuestro cobre y minerales raros. Considera a Latinoamérica como su coto privado de caza. Keiko y López Aliaga, unos felipillos como tantos otros ha habido en nuestra historia, rápidamente se arrodillaron frente a él. Seguramente piensan que así sus amigos oligarcas locales harán buenos negocios, pero podrían llevarse un gran fiasco. ■



Donald Trump: se trata de la defensa y seguridad de los Estados Unidos.

nadie más. Dice también claramente que, siguiendo la doctrina Monroe de hace casi 200 años, Latinoamérica es su patio trasero y que nadie más se meta. ¿Por qué entonces ahora declara al Perú como "aliado"? Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE.UU. -cargo similar al de un ministro de relaciones exteriores con algunas funciones de primer ministro-, reveló que se trata de "impulsar la cooperación en minerales críticos", refiriéndose a nuestro cobre y las llamadas "tierras raras" que hay en nuestro territorio. Mientras tanto, al pueblo peruano no se le ha informado nada en relación a qué tipo de pacto se está arreglando bajo la mesa.

Como escribimos la semana pasada, los Estados Unidos tienen interés estratégico en estos minerales críticos en su pelea por el dominio mundial frente a China y han venido actuando al respecto desde meses atrás. A Ucrania le impusieron que entregue su minería como precio para que no la echaran en

CON ESE PODER TRUMP PODRÁ AMENAZAR Y, LLEGADO EL CASO, ATACAR EN FUNCIÓN DE SUS PROPIOS INTERESES, YA SEAN MINERALES RAROS, COBRE O EL PUERTO DE CHANCAY

Los Salazar Bondy



RONALD GAMARRA

Nacieron en Lima con un año de diferencia. Primero, Sebastián; 22 meses después, Augusto. Brillaron por un lapso importante, si bien breve, en el mundo artístico e intelectual de nuestro país, y se fueron prematuramente, cuando sin duda estaban por dar sus frutos mayores. Con todo, dejaron una huella que no se ha desvanecido con el paso de las décadas recientes. Sebastián se fue hace 60 años; Augusto, hace medio siglo. Sin embargo, de diversas formas han estado presentes porque sus respectivas obras se vinculan directamente a los desafíos de un país en vías de modernización contradictoria y caótica.

Sebastián fue sobre todo poeta –poesía de la más alta hay en sus versos y en su vida, diría Washington Delgado ante su féretro–, pero a la vez abordó con solvencia y creatividad los predios del narrador, del dramaturgo, del ensayista. Obtuvo tres veces el Premio Nacional de Teatro. Cultivó el periodismo con pasión y profesionalismo cotidiano, e hizo de esta actividad el medio con el cual se ganaba dignamente la vida. Más allá de estas definiciones parciales, fue un extraordinario animador y renovador cultural, el alma de una escena más bien opacada por la pertinacia de las dictaduras que siempre han ahogado la libertad y la alegría de vivir. Fue un creador vital, inquieto, voluntarioso y lleno de generosidad, siempre dispuesto a echar un hombro a otros autores más jóvenes. También un polemista, recordándose aún sus debates con José María Arguedas y Ciro Alegría.

Augusto, por su parte, desarrolló la aguda mentalidad, cultura y capacidad analítica del filósofo. Ambicionaba profundizar en el entendimiento de su disciplina, llegando en ello al primer nivel internacional, y a la vez divulgar lo máximo posible el conocimiento de la filosofía en nuestro país, a toda altura y escala, pero sobre todo entre los estudiantes de la escuela secundaria y la universidad. En este empeño, asumió la educación como una vocación ineludible, a la cual dedicó buena parte de lo medular de sus esfuerzos e investigaciones. Fue, en su tiempo,

el historiador de las ideas y, principalmente, el líder de una renovación profunda de la educación y la política educativa del Perú.

Tanto Sebastián como Augusto vivieron profundamente la pasión de pensar y trabajar por el Perú y su pueblo. Creyeron en ellos –no en sus emblemas, conmemoraciones y tatchines– y buscaron su liberación. En tal sentido, pertenecieron a esa clase de intelectuales íntimamente comprome-

tidos, de modo voluntario y gratuito, pero a la vez irrenunciable, con los problemas sociales y políticos de un país marcado por una injusticia insondable y la marginación de las mayorías. En tal contexto, ambos hermanos tomaron partido por la renovación y la justicia social, por la plena igualdad republicana, por la abolición de la discriminación en todas las formas repugnantes que los rezagos semif feudales imponían en el país.



Sebastián Salazar (de perfil), su hermano Augusto y la madre de ambos, María Bondy.

No fueron intelectuales de salón elegante, ni tigres de papel, aunque tampoco fueron radicales de barricada. Buscaron aunar el conocimiento y la razón con el cambio profundo de la conciencia individual y social. Perseguieron reformas trascendentes, es decir, reales y duraderas, que movieran la sociedad de sus ligaduras de injusticia; no un episódico motín para llevar al poder a un nuevo caudillo. Tal propósito los orientó a asumir una determinada forma de socialismo no autoritario. No pretendieron en ningún caso el éxito personal en la sociedad. Por el contrario, insurgieron contra ella a su modo, empuñando las armas del conocimiento.

Ambos hermanos lucían con naturalidad, como una obligación genética, una honradez acrisolada. Procedentes de una familia de clase media decen-

te y laboriosa, eludieron la tentación del dinero y el poder, sin perjuicio del decoro. Poseedores de una inteligencia extraordinaria, no la usaron para llenarse de ventajas y privilegios, sino para cultivarse e ilustrar a los demás con los beneficios del razonamiento, la educación y la cultura. En verdad, fueron Quijotes sanmarquinos que abrieron camino fecundo para que otros siguieran y profundizaran la huella, conscientes de que la transformación social que ansiaban solo podía ser el resultado de una obra colectiva e histórica.

Sebastián nos dejó una obra literaria que, más allá de los esfuerzos de la Casa de la Literatura, espera todavía ser debidamente recopilada y difundida. El Estado se ha desentendido en general de esta tarea, pero su familia ha hecho esfuerzos encomiables en tal sentido, destacando la tenacidad del poeta Alejandro Sustis, quien además ha logrado

recopilar cientos de sus artículos y crónicas periodísticas. Lo propio sucede con la creación legada por Augusto en los terrenos de la filosofía y la educación, que sigue pendiente de compilación, edición y divulgación. Tenemos una deuda impaga con ambos y debemos saldarla rescatando sus obras completas y difundiéndolas como merecen.

Los hermanos Salazar Bondy han cumplido el centenario de su nacimiento. Augusto, este año, hace solo unos días, el 8 de diciembre. Sebastián, el año pasado, el 4 de febrero. Ambos momentos han pasado con un resonante silencio por parte de las instituciones del Estado. Es natural. No puede esperarse otra cosa de quienes encarnan el *statu quo* reaccionario y discriminatorio contra el cual insurgieron los Salazar Bondy, que a ojos de esa clase política deleznable sólo serían un par de rojillos, caviares, comunistas y terrucos. Porque ahora gobierna en el Perú la hez de la prepotencia del dinero y la ignorancia más burda y crasa.

El centenario de los hermanos Salazar Bondy lo conmemoran en el pensamiento y el corazón quienes no se resignan a abandonar este Perú nuestro de cada día en manos de esta gente con mentalidad de saqueo y espíritu de encomenderos. Quien, pese a todo, crea cultura y la difunde, conmemora y celebra a Sebastián y Augusto. Quien insiste, contra toda adversidad y represalia, en defender una educación de calidad para el pueblo, conmemora, celebra y prolonga su ejemplo y su legado. Los Salazar Bondy pertenecen a esa clase de héroes contemporáneos y cotidianos, cuyo ejemplo nos anima a no renunciar y persistir por el Perú.

PORQUE AHORA GOBIERNA EN EL PERÚ LA HEZ DE LA PREPOTENCIA DEL DINERO Y LA IGNORANCIA MÁS BURDA Y CRASA

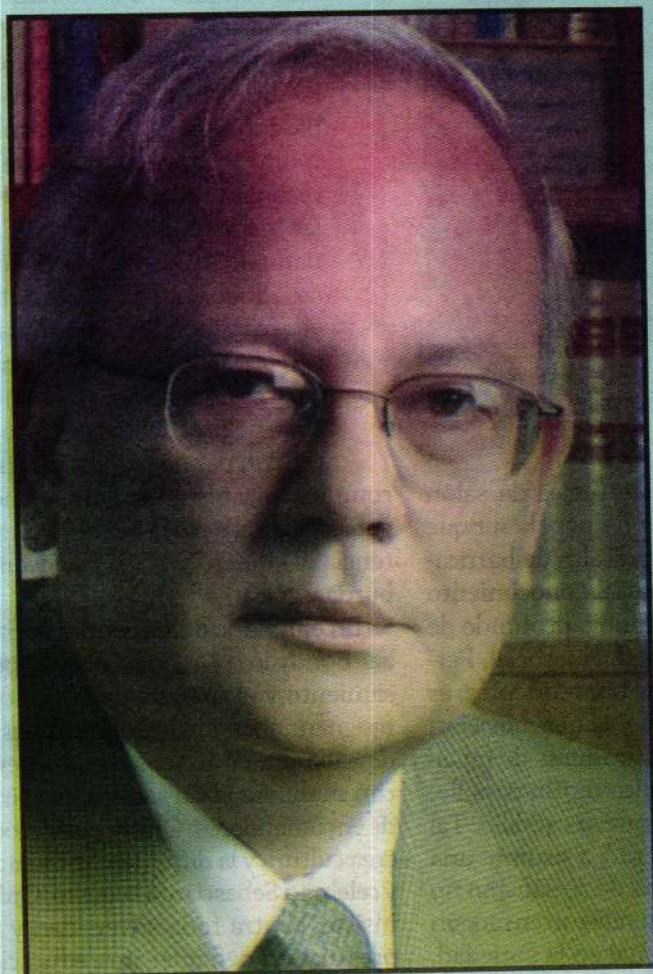
HILDEBRANDT

en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

**Todos los lunes, antes de las 9 DE LA NOCHE, siga
en vivo el Podcast de César Hildebrandt**

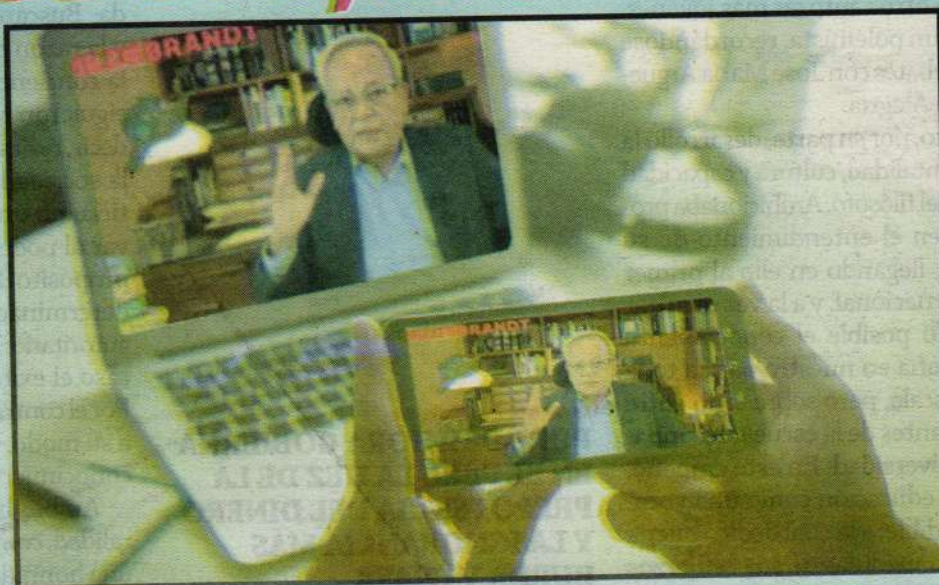
**Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial**



**Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los**

**241,476 suscriptores
y ha sumado**

35'596,030 vistas

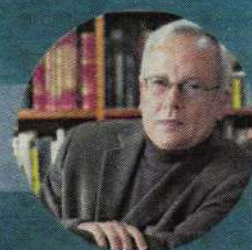


Siguen hablando



TOP - SEMANAL PROGRAMAS STREAMING MAS VISTOS

SEMANA: 08 al 12 DE DICIEMBRE



HILDEBRANDT EN
SUS TRECE

1 185,564

HABLA GOOD

2 125,128



FACE TO FACE

3 120,424



BRUTALIDAD
POLITICA

4 103,852



LA MANADA

5 103,479



ROSA MARIA
CIFUENTES

6 92,784



OUKE

7 88,164



ESB_DOTA2

8 80,608



LA ENCERRONA

9 79,851

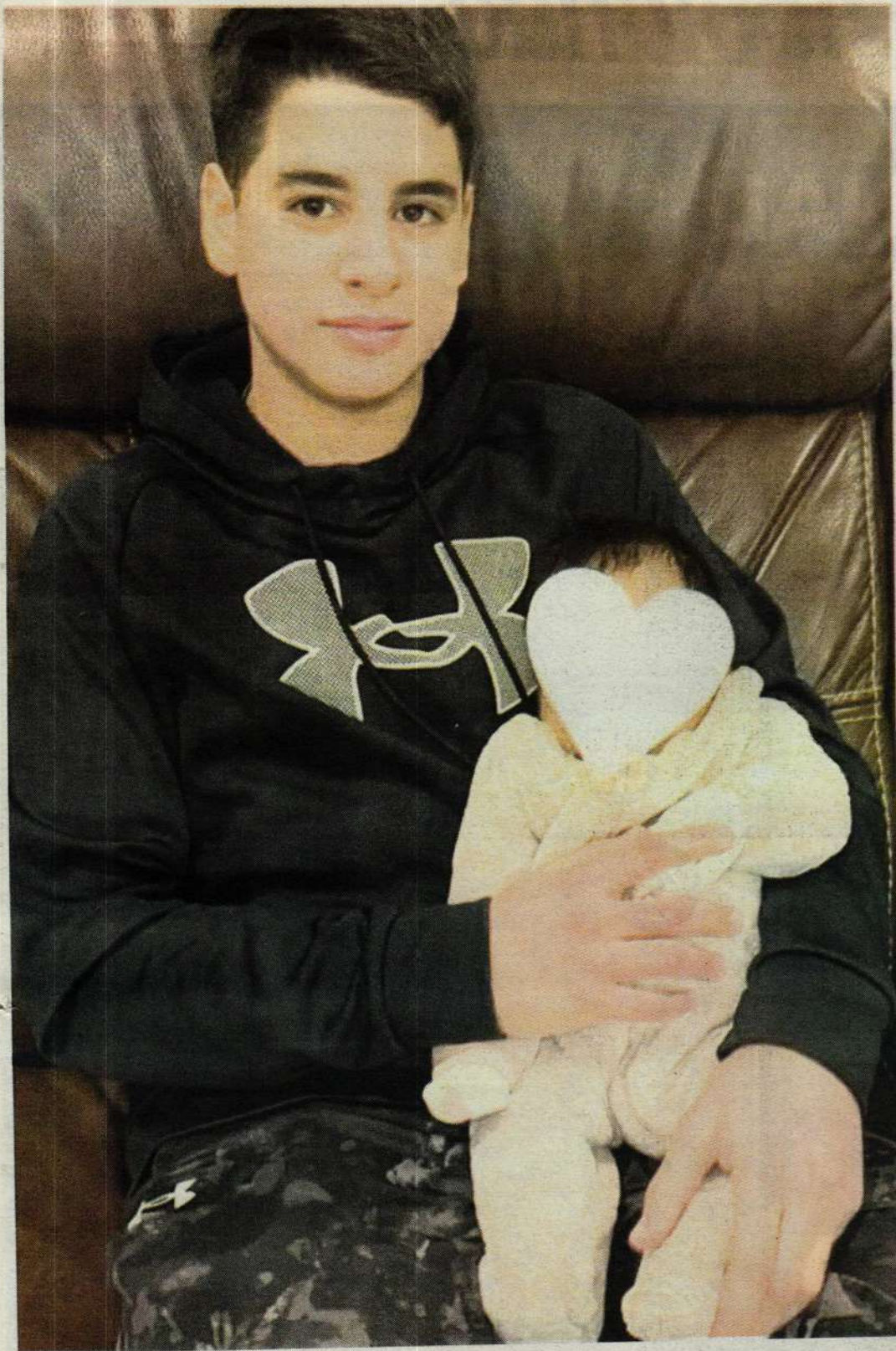


SIN GUION

10 78,493



Información tomada de TOP SEMANAL PROGRAMAS STREAMING MÁS VISTOS
DEL LUNES 8 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE EN LA PLATAFORMA YOUTUBE PERÚ.



Mohammad Ibrahim, de 16 años y nacido en Estados Unidos, pasó 286 días dentro de una prisión militar israelí por supuestamente haber "tirado una piedra". (FOTO: Zahar Ibrahim)

dería familiar. Mohammad Ibrahim, nacido en Estados Unidos, es el menor de cuatro hermanos. Fue a Cisjordania a pasar unas vacaciones con familiares.

"[Presidente Donald Trump] haga usted lo que prometió. ¿O ya no se acuerda de 'América primero'? Mi hijo es ciudadano estadounidense y es menor de edad", reclamó el padre durante una entrevista de la BBC.

El problema de Mohammad son sus raíces. La familia del adolescente es originaria del noreste de Ramallah. *Al-Mazra'a ash-Sharqiya* es una

otras organizaciones, han denunciado que los prisioneros son sistemáticamente abusados, torturados, violados y ejecutados.

"Se ha producido un aumento dramático de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en todos los centros de detención. Se llevan a cabo con casi total impunidad y es política estatal dirigida contra los palestinos", acusa el último reporte del Comité Público Israelí contra la Tortura, publicado el pasado 13 de octubre. En este escenario, el centro de detención *Megiddo* tiene un puesto destacado.

"La Prisión *Megiddo* es famosa por su brutalidad y crueldad", escribió el padre de Muhammad a Mike Haridopolos, un congresista republicano. "Le pedimos amablemente que por favor nos apoye de alguna manera. Hemos agotado todos nuestros esfuerzos intentando solucionarlo a nivel local, aquí en Israel, pero no nos queda más opción que pedirles ayuda a los funcionarios de Florida", rogó Zahar.

La oficina del congresista recibió la carta y se la reenvió al Departamento de Estado. El Departamento de Estado se la mandó a la embajada de Estados Unidos en Israel. Y allí dijeron estar "siguiendo el procedimiento estándar".

Llegó la primavera, pasó el verano y cuando estaba por empezar el invierno el adolescente seguía detenido y sin cargos. "Acá las audiencias no son como en Estados Unidos", contó Zahar Ibrahim a *National Public Radio*, de Estados Unidos. "Se espera 7, 8, 9 horas porque nunca te avisan a qué hora exactamente empieza. Y cuando al final consigues entrar a la sala, el juez te dice que regreses en un mes. Y así llevamos meses", narró el padre.

La suerte del adolescente cambió con el asesinato a sangre fría de un pariente. El 11 de julio una pandilla de colonos israelíes mató a golpes a Sayfollah Musallet, primo hermano de Mohammad Ibrahim. Sayfollah, de 20 años, agonizó durante horas porque sus victimarios impidieron el paso de las ambulancias y paramédicos.

El brutal asesinato de su primo, también ciudada-



La semana pasada la ONG internacional Euro-Med Monitora de los Derechos Humanos publicó un informe denunciando la ejecución de Zaher Nasser Shamia, un chico de 16 años nacido en Jabalia, en el norte de la Franja. (FOTO: vía Facebook)

aldea de agricultores con extensos olivares y 4,000 habitantes. Y fue ahí donde lo raptó el ejército israelí.

Los tres primeros días los padres de Mohammad fueron incapaces de conseguir respuesta alguna sobre su paradero y los motivos de su detención. Al cuarto día el ejército notificó a la familia que Mohammad había sido detenido por "lanzar una piedra" y se enfrentaba a una pena de hasta 20 años. El comunicado no daba más detalles.

Cuarenta y cinco días después, Zahar y Muna recibieron la primera noticia sobre su hijo. Estaba vivo. Otro adolescente, liberado de la cárcel militar *Megiddo*, dijo haberlo visto allí. Era uno de los peores escenarios posibles.

Las cárceles militares israelíes son centros de tortura. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, la Defensoría Internacional de los Niños, las ONG Samidoun y B'Tselem, entre

echó las sábanas encima por instinto de protección. Los soldados lo arrastraron a la calle. Le ataron las manos en la espalda, le vendaron los ojos, lo lanzaron dentro de un jeep y se lo llevaron. Toda la operación duró menos de cinco minutos. Tuvieron que pasar 286 días y vivir un infierno de torturas hasta recuperar su libertad.

"Pregúntale a quien quieras, es de verdad un niño muy dulce, le gusta jugar deportes, le gusta jugar con la PlayStation y le gusta ir al colegio", contó Zahar, el padre de Mohammad, tras el operativo, el 15 de febrero de este año.

Los Ibrahim son ciudadanos estadounidenses y viven en Tampa. El padre y la madre, Muna, trabajan en una hela-

escuadra de 20 soldados israelíes apertrechados con rifles, ametralladoras automáticas y linternas se abrían paso por encima de la puerta derribada y tirando todo a su paso. Arrodillados, con los brazos alzados y una escopeta en la nuca, los padres vieron a los soldados entrar en el cuarto de sus hijos. Mohammad se

Crímenes

► La salvaje represión israelí ha hecho de muchas de sus cárceles centros de tortura y ejecuciones y ha convertido a los adolescentes en blancos favoritos

ELIA Y. DIZ

Mohammad Ibrahim, un adolescente de 15 años, y su familia dormían profundamente cuando los despertó un estruendo. Los adultos saltaron de la cama y corrieron hacia la entrada de la casa. Una



Soldados detienen a un niño autista por lanzar una piedra durante las demostraciones en contra de la "visita" de colonos israelíes al santuario de Atnaeil Ben Kinaz, en la ciudad cisjordana ocupada de Hebrón, el pasado 16 de abril de 2025. (Foto de HAZEM BADER/AFP vía Getty Images)



Megiddo destaca entre las prisiones militares israelíes por ser particularmente brutal y cruel. (FOTO: Reuters)

no estadounidense, atrajo la atención de los medios norteamericanos hacia Mohammad. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, visitó a la familia y prometió ayudarlos. Ante la presión internacional, el ejército permitió que Mohammad fuese visitado por un funcionario de la embajada y por la Defensora Internacional del Niño.

El adolescente había perdido 12 kilos y tenía sarna. Los signos de tortura eran evidentes. El reporte de la ONG recogió que el menor de edad había sido transferido a Ofer, prisión

donde más de media docena de soldados fueron grabados a principios de año agrediendo sexualmente a un prisionero palestino hasta matarlo.

Mohammad había sido golpeado por soldados con las culatas de sus rifles. Dormía sobre una colchoneta en el suelo aun los días de más frío. De desayuno recibía tres trozos de pan pequeños y una cucharada de yogur. De almuerzo media taza de arroz blanco y una salchicha. A veces, de cena le daban unas cucharadas de mermelada, pero lo habitual es que no le dieran nada.

Finalmente, por la presión

mediática, el 27 de noviembre, el día de Acción de Gracias, Mohammad Ibrahim fue liberado.

No correrá la misma suerte "Ahmed", otro adolescente de 13 años. No tiene pasaporte norteamericano.

Nacido en Jafa, "Ahmed" tiene autismo severo y capacidad cognitiva muy limitada. Está encarcelado en el "Recinto Ruso" desde mediados de octubre, una prisión militar en Jerusalén. La prensa israelí ha denunciado las torturas sistemáticas a las que es sometido.

"Él es un chico que no puede comunicarse bien con la

gente. Lo quieren presentar como un terrorista, pero está enfermo e indefenso. No es siquiera capaz de entender bien las cosas que suceden a su alrededor", dijo la madre al diario *Haaretz* el 13 de noviembre.

La primera semana de su encarcelamiento "Ahmed" compareció ante la Corte Juvenil de Bat Yam, en Tel Aviv. Dijo en la audiencia que le estaban "obligando a hacer cosas que no quería". El juez, tras escucharlo, aplazó la audiencia una semana.

"Cuando lo visité, estaba esposado, con las manos por encima de la cabeza y los soldados lo trataban como si fuese una amenaza, a pesar de su pequeña estatura", contó Saja Mishherqi Baransi, la abogada del Comité Público Israelí Contra la Tortura (CPICT). "Lo tratan brutalmente, lo humillan. Los guardias y otros prisioneros lo golpean", denunció la perita israelí a *Anadolu* tras visitar a "Ahmed" a finales de octubre.

El 22 de octubre el tribunal juvenil decidió que no era necesario transferir a "Ahmed" a otra prisión. Según la *Shin Bet*, el servicio de inteligencia interno de Israel, el adolescente se había unido a un grupo yihadista *online*. Quería convertirse en un mártir, morir por la causa palestina, y había tomado fotografías de edificios israelíes.

La familia de "Ahmed" y su abogada dicen que es imposible. El muchacho es "absolutamente discapacitado", explica la madre.

A mediados de noviembre, cuando el caso ganó notoriedad en Israel tras una serie de publicaciones del diario *Haaretz*, "Ahmed" fue transferido a una celda de aislamiento. El periódico volvió a sacar otro informe denunciando que los soldados continuaron violándolo y torturándolo y que no tiene acceso a servicio médico. Al cierre de este informe, todavía no hay fecha para su audiencia.

Naciones Unidas denunció la semana pasada que tiene registro de por lo menos 9,183 palestinos en custodia israelí. Más de un tercio están encarcelados bajo "detención administrativa", sin cargos en su contra o derecho a un juicio. Según la ONU, esta política forma parte de la campaña

de limpieza étnica en contra el pueblo palestino en Cisjordania.

Sólo esta semana el gobierno israelí validó 19 nuevos asentamientos colonos ilegales en Cisjordania. "Estamos avanzando la soberanía israelí de facto sobre el terreno para impedir cualquier posibilidad de establecer un Estado árabe en Cisjordania", dijo Bezalel Smotrich este miércoles durante la ceremonia de oficialización de las colonias.

B'Tselem, el Centro de información israelí sobre derechos humanos en territorios ocupados, denuncia que desde octubre del 2023 Israel ha borrado del mapa a 44 comunidades palestinas. Otras 11 están a punto de desaparecer. Y mientras tanto el genocidio en Gaza continúa.

La semana pasada la ONG internacional Euro-Med Monitorea de los Derechos Humanos publicó un informe denunciando la ejecución "extremadamente brutal" de Zaher Nasser Shamia, un chico de 16 años nacido en Jabalia, en el norte de la Franja.

Zaher Nasser se refugiaba con su familia en las ruinas del viejo Club de Servicios de Jabalia, un polideportivo a 50 metros de la nueva "línea amarilla". Según el plan de paz de Trump, la "línea amarilla" es la frontera que delimita el territorio bajo ocupación sionista. Pero el ejército de Israel la mueve continuamente de manera arbitraria comiendo más territorio gazatí.

A las 9 de la mañana del pasado miércoles 10 de diciembre, cuando Zaher Nasser se despertó, los soldados habían vuelto a desplazar la frontera varios metros sin previo aviso.

El adolescente, junto a tres amigos, salió a caminar. Hablaban animadamente cuando una bala impactó en Zaher. Sus amigos intentaron rescatarlo, pero tuvieron que dejarlo tirado en el suelo cuando francotiradores abrieron fuego contra ellos. Pocos minutos después, un tanque se acercó al adolescente malherido.

Cuenta un miembro de la ONG Euro-Med, testigo del asesinato, que Zaher movía la cabeza y un pie cuando los soldados se bajaron de las camionetas y pasaron junto a él. El tanque pasó por encima del muchacho, lentamente. ■

Podre **uniforme**

► La Dirección contra la Corrupción de la Policía (DIRCOCOR) ha capturado en los últimos dos años a 462 agentes coimeros y extorsionadores. José Jerí sigue hablando de "medidas de emergencia"



El jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía, general PNP Luis Lira. Salvando el honor de una institución en crisis terminal.

RICARDO VELAZCO

A la 1 de la mañana del pasado 9 de diciembre una moto con dos hombres a bordo llegó hasta el domicilio del general de la Policía Luis Lira. Sin descender del vehículo, uno de los sujetos timbró insistentemente alarmando a la familia que a

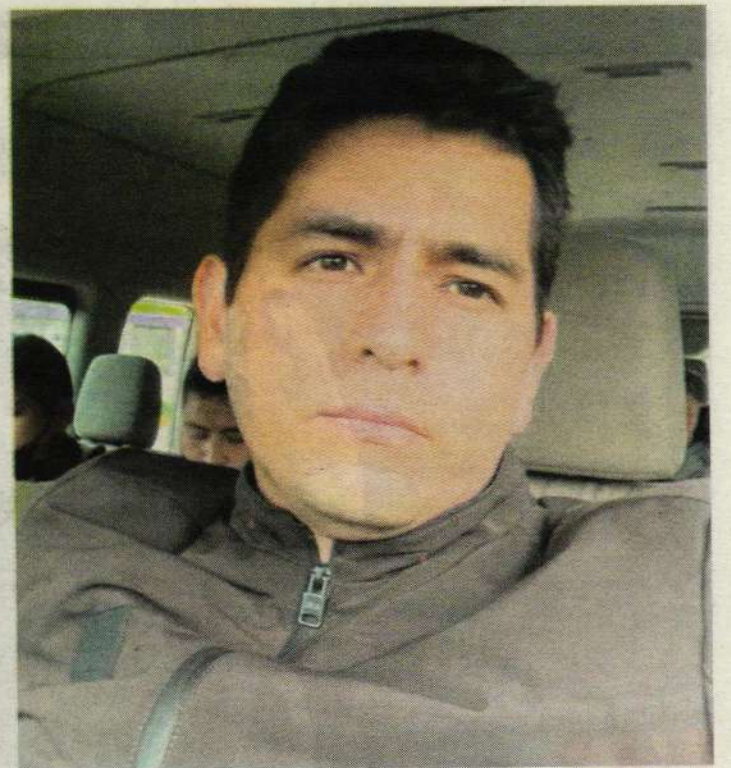
esas horas dormía. El general, sospechando que se trataba de un ataque de delincuentes, se acercó a la puerta cargando su arma reglamentaria. Los sospechosos salieron del lugar a toda velocidad. El mensaje era claro: "Sabemos dónde vives". El día elegido tampoco era casualidad.

El incidente sucedió en la víspera de un operativo anti-

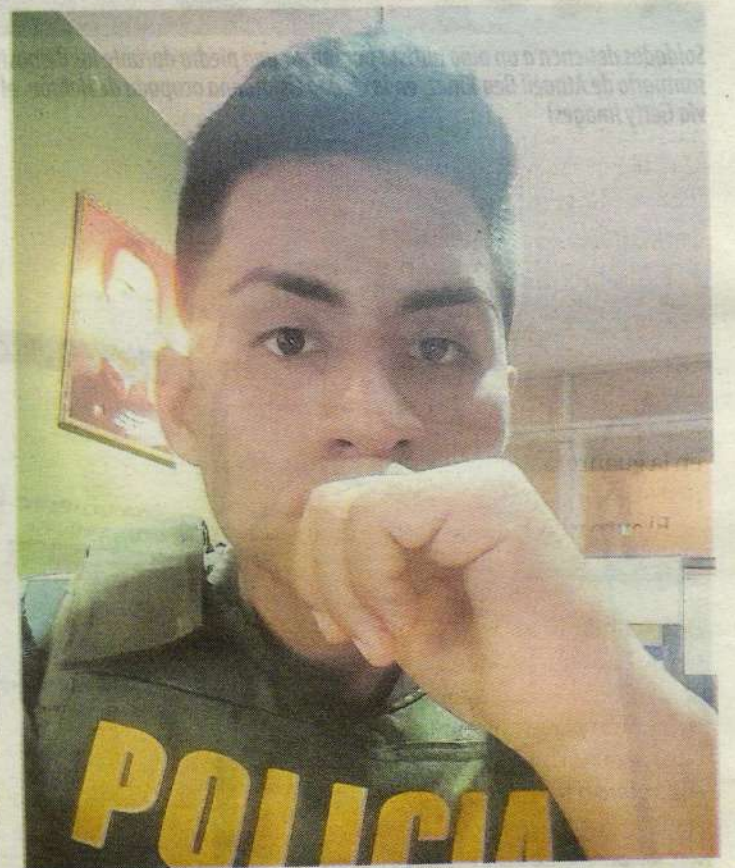
corrupción que se saldó con la detención de seis policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dirinci). Los agentes habían cobrado una coima de 15,000 soles por liberar a un detenido.

El operativo de contrainteligencia comenzó en marzo pasado, cuando "Pablo", un experto en electrónica con antecedentes por estafa,

El capitán PNP Erick Álvarez Oré está siendo investigado por presuntamente detener a personas para luego extorsionarlas.



El suboficial Cristóbal Melgarejo Mori fue uno de los cuatro "Halcones" que detuvieron a Luis Javier Villarán y a Salvador Caucho para sacarles 8,000 soles a cambio de liberarlos.



acudió al despacho del general Lira para denunciar que había sido víctima de un falso operativo policial.

El hombre narró que un grupo de cinco policías liderados por el teniente Luis Juárez Velázquez había allanado su departamento y lo detuvo junto a otras cuatro personas que estaban con él en ese momento. Allí mismo los acusaron de cometer estafas a través de las redes sociales y el teniente Juárez les propuso liberarlos a cambio de 30 mil soles.

Los detenidos juntaron 15 mil soles que depositaron en la cuenta de una mujer llamada María Gabriel Chauca. "La víctima aceptó ante el general

Lira que tenía antecedentes criminales por el delito de estafa, pero no estaba dispuesto a pagar la extorsión a cambio de su libertad", explica un oficial que participa en la investigación de contrainteligencia.

Durante nueve meses un equipo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocor) le siguió los pasos a la banda hasta que finalmente se dispuso la detención de los cinco agentes de la Dirinci.

Según un reporte interno de la Dircocor, la Policía es la institución más corrupta del país. Entre el 2024 y este año, esta unidad de contrainteligencia ha capturado a 462 policías por cobros de coimas.

El 4 de agosto del año pa-



El mayor PNP Luis Guillén Ticona, comisario de Villa Hermosa, fue detenido el pasado 3 de diciembre por recibir cupos a cambio de permitir que sus subordinados tengan carta libre para brindar servicios privados en horarios de trabajo.

sado cuatro suboficiales de la unidad de los "Halcones", identificados como Jefferson Castillejos Hidalgo, Jonathan Tunqui Rodríguez, Cristóbal Melgarejo Mori y Manuel Reyes Arribasplata, intervinieron al venezolano Salvador Cauchó Vásquez mientras hacía servicio de colectivo en Carabayllo. Tras revisar el auto, los agentes encontraron en la guantera munición para pistolas de 9 mm.

El auto y las balas le pertenecían a Luis Javier Villarán, un comerciante textil que tiene licencia para portar armas desde hace nueve años. Javier se presentó en el lugar de la detención para mostrar la documentación reglamentaria. Allí mismo los "Halcones" lo registraron, lo esposaron y lo metieron al auto. Bajo la amenaza de llevárselo detenido, lo acusaron de dirigir un negocio de préstamo "gota a gota" y, tras un regateo sobre el monto de la extorsión, le exigieron 10 mil soles para dejarlo ir.

"Los Halcones incluso trasladaron a Javier y al venezolano a un banco cercano para retirar el dinero", cuenta un oficial que investigó a la banda de policías. También les quitaron el efectivo que llevaban encima. En total, los agentes rapiñaron ocho mil soles. Pero no estaban satisfechos.

Horas después de dejarlos ir, Javier recibió llamadas y mensajes exigiendo más dinero. Asustado, acudió a la Dirccor para denunciar el hecho.

En junio del 2025 la unidad anticorrupción arrestó a los cuatro policías, quienes confesaron el cobro ilegal, pero solo fueron suspendidos. Las víctimas no recuperaron el dinero.

Otro caso emblemático es el de "Los Marianitos". En febrero de este año la Dirccor arrestó al suboficial Richard Paredes Valencia por su presunta vinculación a una banda que operaba en el Depincri de Breña. Según las pesquisas, la organización la integrarían el comandante Juvenal Calderón Paredes, el capitán Erick Álvarez Oré y los suboficiales Fidel Acevedo Huapaya, Edson Alvarado Valle y Luis Escobedo Ojeda. Entre el 2022 y el 2023 la banda se habría dedicado a "realizar intervenciones ilegales dirigidas contra comerciantes o vendedores de productos derivados del cannabis", dice el expediente fiscal.

Los policías armaban allanamientos y detenciones para extorsionar a los implicados a cambio de eliminar el expediente de los archivos de la institución. El dinero se depositaba en cuentas que estaban a nombre de dos mujeres: Vanessa Romero Martínez y Jazmín Rojo Vilca. Según las pesquisas, habrían prestado sus identidades a cambio de una comisión.

Durante las investigaciones se identificó al menos a cinco víctimas de la banda. El caso más grave es el de Ángel Martínez Baca.

En noviembre del 2022



El suboficial Omar Cieza Sánchez era parte de los policías que le cobraron una coima a la empresaria Kenli Kcomt. Cieza se encargó de contar billete por billete los 4,000 soles que Kcomt pagó para librarse de una acusación "por contrabando".



El comandante Juvenal Calderón Paredes es uno de los implicados en los cobros ilegales de la banda de policías "Los Marianitos".

Martínez, que trabajaba en una empresa especializada en la venta legítima de aceite de cannabis, fue detenido por un grupo de policías cuando trasladaba un producto a un cliente. Tras el arresto lo llevaron al Departamento de Inves-

tigación Criminal de Breña. Allí primero lo amenazaron y luego contactaron a la empresa para cobrar la extorsión.

"Le metieron miedo. Le dijeron que lo acusarían por tráfico de drogas y le exigieron a la empresa 100 mil soles para liberarlo", señala Leonardo Latínez, abogado de la empresa.

La táctica era siempre la misma: los policías empezaban con montos altísimos para luego ir haciendo rebajas. En este caso llegaron hasta los 10 mil soles. Latínez le aconsejó a la empresa que no accediera porque no habían cometido ningún delito.

Cuando los agentes se dieron cuenta de que la empresa no iba a pagar, comenzaron a presionar a la familia del empleado, que seguía detenido. "Si ya hablaste con Acevedo (uno de los suboficiales implicados) y confías en él, haz el trato con él. Acá somos cuatro y los cuatro somos uno", le habría dicho el policía Luis Escobedo a Martínez, según recoge el expediente fiscal.

Al final, la familia de Martínez depositó dos mil soles en la cuenta de Jazmín Rojo, quien a su vez transfirió el dinero al oficial Álvarez. De acuerdo a la resolución judicial, tras el pago los policías trataron de que Rojo figurara en los documentos de la detención como la abogada del detenido "con la intención de justificar las transferencias realizadas a dicha persona y que sean consideradas como pago por defensa".

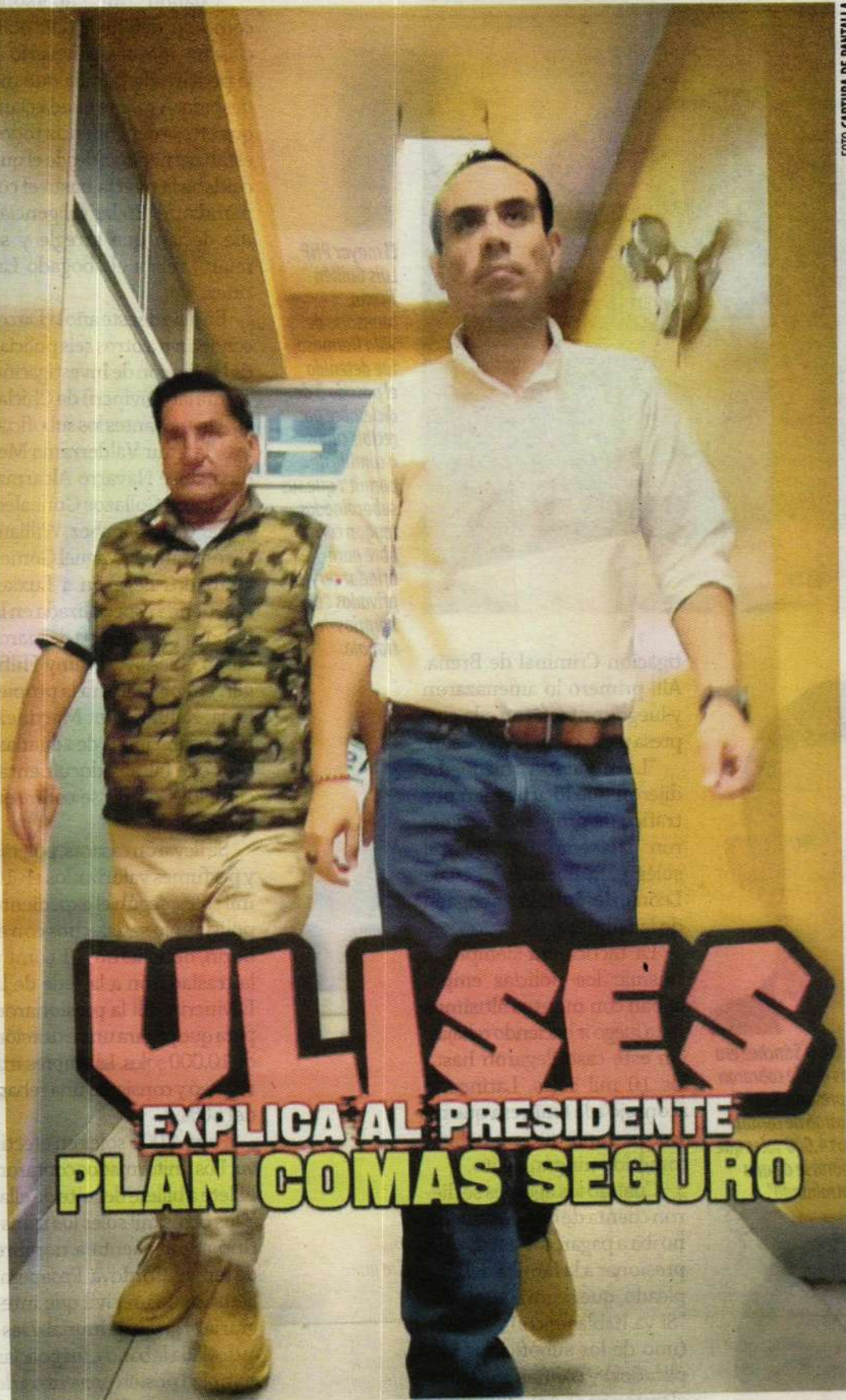
"Cuando me apersoné como su defensor, los policías no me dejaban verlo y le pedían a la familia que me despidiera. A mí me queda claro que en esa dependencia todos estaban metidos: desde el que cuidaba la puerta hasta el comandante. En las diligencias me decían que arregle y se reían", relata el abogado Latínez.

En julio de este año la Dirccor detuvo a otros seis policías de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo. Un mes antes los suboficiales Vladimir Valderrama Medina, José Navarro Alcarraz, Giancarlo Collazos Gonzales, Omar Cieza Sánchez, William Girón García y Miguel Gómez Granados llegaron a Luxxo, una tienda especializada en la importación de ropa de marca como Guess y Tommy Hilfiger. Le solicitaron a la propietaria, Kenli Kcomt Martínez, las declaraciones de aduanas. Como le faltaba documentación, los policías se cobraron en especies.

Se llevaron casacas, poleras y perfumes valorizados en 10 mil soles, según el expediente policial. No satisfechos con el botín, detuvieron a Kcomt y la trasladaron a la sede de la Divincri y allí la presionaron para que pagara una extorsión de 10,000 soles. La empresaria regateó y consiguió una rebaja del 50%.

Pagó 4,000 soles en efectivo. Los uniformados contaron billete a billete delante de ella. Y los otros mil soles los transfirió a una cuenta a nombre de Ángel Córdova Pasapera. Se trata de un civil que integraría el grupo criminal. Desarticulada la banda, los policías cumplen prisión preventiva de 18 meses por disposición del Poder Judicial.

A veces las coimas no son endogámicas. La semana pasada el mayor Luis Guillén Ticona, comisario de Villa Hermosa, en El Agustino, fue arrestado tras detectarse que, desde febrero pasado, habría recibido entre 50 y 100 soles diarios de cuatro de sus subordinados para no ser incluidos en los turnos de patrulla y darles carta libre para ofrecer servicios particulares en horario de trabajo. Esto en pleno estado de emergencia y en una de las zonas más peligrosas de Lima. ■



Video que colgó el hoy prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, durante el "operativo" que realizó junto a Jerí el pasado 27 de octubre.



Pablo Mendoza Cueva, hombre de confianza del partido Somos Perú y actual alcalde de Carabaylo, al lado de Patricia Li.

Infarto de corazón

► Cuatro alcaldes de Somos Perú, el partido del azaroso sucesor de Boluarte, baten marcas de asesinatos y extorsiones en sus distritos y se distinguen por sus rastreras adulaciones a quien consideran "su presidente"

FABRICIO CABRERA BUDEN

La barra brava de José Jerí la integran dos alcaldes de Somos Perú, uno de ellos sentenciado por corrupción y denunciado por malos tratos. Se trata de los alcaldes de Comas y San Juan de Lurigancho. Es una coincidencia que esta dupla de sobones capitaneen dos de los distritos con más homicidios y extorsiones en el país. Otros dos alcaldes de Somos Perú destacan en el ranking

de la criminalidad: los burgomaestres de Carabaylo y Puente Piedra. En total, este cuarteto aporta a las estadísticas más de 170 homicidios, casi un tercio de los 622 asesinatos ocurridos en Lima este año. El corazón se desangra.

San Juan de Lurigancho se ha convertido en el escenario favorito de Jerí para sus selfis. El 2025 este distrito aportó a las estadísticas de la criminalidad 73 víctimas mortales. También lidera las denuncias por extorsión con 1,174 casos.

Isidro. Pero de acuerdo al MEF, de esos 56 millones, el 40% se destina a alquiler de bienes muebles e inmuebles y servicios administrativos. También incluye contratos por S/ 3,5 millones en publicidad.

Maldonado se ha convertido en un adulator sistemático desde que Jerí se instaló en Palacio. Así que aunque el número de muertos continúa al alza en su distrito, el alcalde utiliza sus redes para corear a su correligionario con comentarios como este: "tenemos un presidente que sabe explicar las cosas", "que se comunica con los ciudadanos y recibe a la prensa".

Esta semana, en pleno estado de emergencia, una persona identificada como Joel Segundo González fue asesinada en los exteriores de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. El crimen se produjo a plena luz del día, frente a comerciantes y transeúntes que circulaban por la zona.

También es de Somos Perú el alcalde de Carabaylo, Pablo Mendoza Cueva. El distrito registra este año 21 homicidios y hasta agosto se contabilizaban 338 denuncias por extorsión.

Más delicada es la situación de Ulises Villegas Rojas, alcalde de Comas, también de Somos Perú. Villegas está prófugo de la justicia para burlar una condena a seis años de prisión confirmada en segunda instancia hace dos semanas. Hasta entonces era habitual que se hiciera selfis con Jerí.

Este 2025 Comas suma 52 homicidios ubicándose en el quinto lugar con más asesinatos en Lima Metropolitana. También registra 576 denuncias por extorsiones. Oficialmente, el presupuesto destinado para patrullar sus calles fue de 26 millones de soles. A dos semanas de terminar el año, le han sobrado 6 millones.

El 27 de abril de 2016 Villegas fue denunciado por violencia familiar. Su esposa, Lydia Coral Bustamante, lo denunció por agresiones físicas y verbales ocurridas en su vivienda, en el distrito de La Molina.

El parte policial indica: "Estaba viendo televisión y

El 22 de octubre pasado, a las 00:52 de la madrugada, Jerí publicó en X una foto suya dentro del vehículo presidencial. La imagen iba acompañada de una leyenda que decía: "Nunca exijas nada que no ofrezcas". Esa misma madrugada visitó el penal de San Juan de Lurigancho al lado del alcalde del distrito, Jesús Maldonado. Desde entonces, ha regresado al menos en tres ocasiones, siempre con foto incluida y al lado de Maldonado.

San Juan de Lurigancho también es el segundo distrito que maneja más presupuesto en materia de orden público y seguridad con S/56'033,614. Le sigue San



FOTO PRESIDENCIA

Jerí aparece junto al alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, con quien se ha fotografiado al menos en tres ocasiones desde que llegó a Palacio. El 2025 este distrito aportó a las estadísticas de la criminalidad 73 víctimas mortales. También lidera las denuncias por extorsión con 1,174 casos.



FOTO PRESIDENCIA

Encabezó un operativo en Puente Piedra junto al alcalde Rennán Espinoza el 25 de octubre pasado. El distrito registra 26 homicidios en 2025, ocupa el noveno lugar en asesinatos en Lima y, durante el estado de emergencia, acumuló 42 denuncias por extorsión.

me preguntó por qué miraba un programa evangélico. Luego arrojó los controles al piso y, en medio de un forcejeo, me cogió del brazo y me lastimó. Después comenzó a insultarme con palabras soeces y dijo que, si no fuera por él, no tendríamos nada

y que no iba a salir de la habitación solo para joderme", se lee.

Villegas también le organizó puestas en escena a Jerí, al menos en dos ocasiones. Una de ellas fue el 10 de noviembre en el colegio Simón Bolívar. Durante el

acto, el alcalde pidió a los escolares repetir el nombre del mandatario y proclamó: "Aquí, en Comas, se le dice mi presidente, tu presidente, nuestro presidente".

Tres días después, el 13 de noviembre, Jerí y Villegas participaron en una activi-

dad pública en Comas, donde el presidente "supervisó" un comedor popular. El acto se realizó el mismo día del cumpleaños de Jerí y contó con la presencia de Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Villegas hizo cuatro videos

para la red social "TikTok" junto al presidente.

Dieciocho días después, el 1 de diciembre, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la condena por colusión agravada contra Ulises Villegas por hechos que se remontan a 2017, cuando Udel Group, su empresa, ejecutó de forma irregular una obra vial en Comas generando un perjuicio al Estado de S/ 300 mil.

Cuando ya la justicia le pisaba los talones a Villegas por la obra de Comas, la empresa obtuvo contratos por S/ 8,8 millones en Puente Piedra, distrito gobernado por otro militante de Somos Perú: Rennán Espinoza, otro fan de Jerí.

De acuerdo con registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en Puente Piedra se han producido 26 asesinatos este año. Ocupa el puesto nueve en casos de homicidios en la ciudad de Lima. Y la extorsión está al alza. Entre el 3 de noviembre y el 10 de diciembre, durante el estado de emergencia, en el distrito se registraron 42 denuncias por este delito, de acuerdo a cifras de la Dirección de Criminalística de la PNP.

Espinoza también tiene en su haber una denuncia por violencia familiar contra su esposa Giovanna Ramos Riojas. De acuerdo con el registro de denuncias oficiales de la PNP, "la insulta y ofende verbalmente, así como humilla en presencia de terceras personas. Dichos maltratos los sufre cuando su agresor se encuentra ebrio y sobrio", indica el parte.

Espinoza le ha organizado un par de shows a Jerí. El primero ocurrió dos días después del decreto del estado de emergencia, el 24 de octubre, cuando recorrió las calles de Puente Piedra junto al alcalde y un contingente de militares y policías durante la madrugada. Se tomaron 16 fotos para las redes sociales. El segundo fue el 1 de noviembre: Espinoza y Jerí se fotografiaron en "acciones operativas" en el distrito. En la página oficial del gobierno se publicaron 27 fotografías. ■

que Espinoza no hubiera actuado con la condescendencia irregular, la fría complicidad con el Congreso, de la fiscal Benavides, porque su conocimiento del sistema legal es mucho más preciso y serio. Es muy probable que ella, siendo Fiscal de la Nación, hubiera actuado de otra manera. Hubiera alzado la voz. Por eso la desplazaron, es dable pensar ahora. Lo hicieron para poder llevar a cabo desde el Congreso esa tarea irregular: vacar sin votos a un presidente.

Luego Espinoza fue encumbrada a la Fiscalía de la Nación, con el "trabajo" irregular ya hecho. Los fiscales no opinan de otros casos, porque pueden ser apercibidos. Pero como es una persona seria, ya en cabeza del Ministerio Público, la fiscal comenzó a investigar crímenes tanto del gobierno de Boluarte como del Congreso aliado a ella. Y eso no se lo perdonaron. No le perdonaron que no se sometiera. Que hiciera bien su trabajo de fiscal. En Venezuela no es distinto.

Ahora han decidido no solo destituir, sino escarmentarla. Para que todos los funcionarios en el Perú, del fuero que sean, vean bien lo que les pasa a los que no se "avienen" con el régimen o sus "pactos". Se los destituye, se los inhabilita,

se les hace reglaje, se les quita todo su sueldo, todas sus pensiones. Esto no es solo una medida legal: es un escarmiento político que conduce a disciplinar funcionarios y a reprimir cualquier atisbo de oposición en el Perú. La fiscal no es la única que viene padeciendo este empleo arbitrario de figuras o instrumentos que debieran ser de excepción, de última ratio: el abuso de la "inhabilitación" política por parte del Congreso (que la propia fiscal venía investigando) es una muestra de cómo la democracia peruana se desarma día a día, se desvía de su cauce constitucional. Inhabilitar opositores, destituir fiscales, dejar crímenes graves en la impunidad, "desactivar" comisiones sin que hayan dado ningún resultado todavía no parece propio de un Estado de Derecho. La distorsión y abuso de la herramienta de la "inhabilitación" política en el Congreso peruano no es compatible con una democracia que promueve la participación civil. Perú está cada vez más parecido a Venezuela, donde la "inhabilitación" de opositores y la persecución de funcionarios independientes, como la fiscal Delia Espinoza, están a la orden del día.

2024. No obstante, el registro sanitario del producto recién fue suspendido el 30 de octubre de este año.

A la lista se suma la empresa Droguería Inversiones JPS S.A.C., sancionada con 24 medicamentos suspendidos.

A fines de marzo de este año inspectores de Digemid visitaron el laboratorio chino Huazhong Pharmaceutical, proveedor de JPS. Allí detectaron fallas en el sistema de extracción de aire, malas prácticas de higiene y limpieza en el área de dispensación, equipos oxidados y sacos de materia prima colocados directamente sobre el piso, entre otras irregularidades.

El 25 de abril de este año Digemid denegó el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la comercialización de inyectables como la dexametasona y la atropina. El primero es un medicamento corticoide utilizado para tratar reacciones alérgicas graves, afecciones respiratorias y algunos tipos de cáncer. El segundo se emplea en emergencias cardíacas o en casos de intoxicaciones severas.

Pese a ello, la suspensión del registro sanitario recién se emitió el 29 de octubre. Durante ese período, la empresa continuó vendiendo estos productos a centros de salud, farmacias y boticas.

Desde el lunes este semanario solicitó una entrevista con un vocero de Digemid sin obtener respuesta. También se realizó el pedido ante la sede central del Ministerio de Salud, pero tampoco nos atendieron.

De los laboratorios involucrados, solo Bagó accedió a dar su versión en una entrevista. La empresa aseguró que desde el 2017 no comercializa el medicamento Donataxel, utilizado en tratamientos de quimioterapia. Señaló que, pese a haber renovado el registro sanitario del fármaco por razones vinculadas a la marca, dejó de vender e importar el producto desde ese año.

"Pensábamos que con la discontinuación definitiva del fármaco era suficiente, pero luego nos suspendieron el registro y ahora ya hemos cancelado el registro de ese medicamento", dice Danitza Cárdenas, directora técnica de Laboratorios Bagó Perú.

Cazafanta

► En Río de Janeiro fue capturado el internacional delincuente Augusto Blacker Miller, el canciller fujimorista que hizo apología del golpe de Estado

ELOY MARCHÁN

El fujimorismo también produjo delincuentes de exportación. Desde el pasado jueves 11 Manuel Augusto Blacker Miller, canciller de Alberto Fujimori durante el golpe de Estado de 1992, está recluido en una cárcel de Río de Janeiro a la espera de ser extraditado a Albania. Su nombre estaba en la lista de los más buscados por la Interpol.

Blacker Miller (80) llevaba siete años prófugo de la justicia albanesa. El canciller de Fujimori tiene una sentencia de ocho años de prisión por estafa y fraude. A diferencia de sus cuitas en el Perú, donde se salvó de pisar la cárcel, Blacker Miller pasará una temporada tras las rejas.

El capítulo albanés de Blacker Miller se remonta a inicios del 2012. Ese año, junto a dos italianos, Alberto Paladini y Giampaolo Azzola, fundaron la empresa "Apollonia Investments". Los "emprendedores" querían incursionar en el negocio de la incineración de residuos sólidos en Albania.

Según documentos, en Apollonia Investments Blacker Miller tenía el 80% de participación porque puso USD 11 millones de capital. Sus socios italianos tenían 10% cada uno. Apollonia Investments fue creada en Albania, pero Blacker Miller hizo todos los papeles desde Miami.

El canciller de Fujimori se encontraba en Estados Unidos corrido de la justicia peruana. Había viajado al país del Tío Sam en noviembre del 2002 debido a que, tras la caída del dictador, se le abrió un proceso

judicial por su participación en el golpe de Estado. El 2007 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de rebelión, pero nunca fue extraditado de Estados Unidos. Junto a él, otros nueve ministros fujimoristas que avalaron el golpe de Estado también fueron sentenciados. Juan Briones, quien fungió de ministro del Interior, recibió la pena más alta: 10 años de cárcel.

Medios de Albania reportan que Blacker Miller se metió al negocio de la incineración de residuos porque en Estados Unidos conoció a Baftjar Zeqo, alcalde de Fier, la tercera ciudad más grande del país balcánico. El plan era que Apollonia Investments operara en Fier.

En octubre del 2012 Blacker Miller se mudó a Albania para sacar adelante su proyecto y rápidamente se relacionó con la casta política de ese país. Diarios locales, como "Shqiptarja", reportaron que incluso hizo amistad con Sali Berisha, primer ministro albanés entre el 2005 y 2013.

Berisha estuvo bajo arresto domiciliario hasta noviembre del 2024 por acusaciones de corrupción.

Cuando en el Perú se supo que Blacker Miller andaba por Albania, la Procuraduría Anticorrupción, entonces a cargo de Julio Arbizu, hizo los trámites para extraditarlo. Berisha protegió al canciller de Fujimori. Lo declaró perseguido político y le dio la nacionalidad albanesa.

La oposición criticó duramente la decisión del primer ministro. Erion Brace, líder del Partido Socialista, señaló que Berisha "acoge, protege y apoya a ese mafioso con actividades dudosas en Albania". En Tirana, Blacker

Pendograma solución anterior N°762



Miller vivió en "The Touch Of Sun", una de las zonas más exclusivas de la capital albanesa.

El pedido de extradición de Blacker Miller fracasó porque el Perú no tiene tratado con Albania. Ni siquiera hay embajada o consulado peruano en ese país.

Protegido por su amigo Berisha, Blacker Miller siguió con su proyecto de la planta de reciclaje y convenció a varios inversionistas locales para que invirtieran dinero. El proyecto fracasó el 2014 debido a que el Concejo Municipal de Fier no dio luz verde a la planta de incineración. En la decisión pesó que Blacker Miller era un prófugo de la justicia peruana y que en Albania había una corriente de organizaciones sociales para evitar convertirse en el basurero de Europa.

Blacker Miller no devolvió el dinero a los inversionistas albaneses y fueron ellos quienes lo denunciaron. El monto de la estafa no ha sido revelado. La denuncia fue contra el canciller de Fujimori y el italiano Alberto Paladini.

El tercer socio, Giampaolo Azzola, no fue comprendido porque murió en noviembre del 2014 en medio de una balacera afuera de una discoteca en Tirana.

En el 2015 la Fiscalía de Albania pidió 18 años de prisión para Blacker Miller. Luego de dos años de audiencias, fue encontrado culpable y sentenciado a 8 años de cárcel por fraude.

Antes de su detención, Blacker Miller fugó. Su paradero era desconocido hasta que el jueves de la semana pasada fue arrestado en el exclusivo barrio de Flamengo, al sur de Río de Janeiro.

Ingeniero industrial de la UNI, la carrera profesional de Blacker Miller comenzó en 1971 cuando entró a trabajar en Cofide. Fue viceministro de Economía del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez y luego

Foto reciente de Augusto Blacker Miller, por fin capturado.



Rodolfo Orellana: socio de Blacker Miller en la empresa Sagax Investment, con sede en Miami.



Sali Berisha: primer ministro de Albania entre el 2005 y 2013, amigo y protector de Blacker Miller.

presidente para América Latina del Wells Fargo Bank.

A inicios de los ochenta fue presidente del Banco de la Nación y en las elecciones de 1990 postuló fallidamente al Senado por la lista independiente "Somos Libres".

Entró al gobierno de Alberto Fujimori como asesor del premier y ministro de

Economía Juan Carlos Hurtado Miller. En noviembre de 1991 fue nombrado canciller por Fujimori en reemplazo de Carlos Torres y Torres Lara.

Fue Blacker Miller quien se encargó de justificar el golpe frente a los organismos internacionales. En las reuniones de la OEA dijo que

"había tenido respaldo popular" y que la legitimidad del régimen iba a ser validada con un referéndum.

También señaló que Fujimori rompió el orden democrático por "la actitud obstructionista del Congreso" que amenazaba al Perú con un estado de "ingobernabilidad". Y pidió "comprensión"

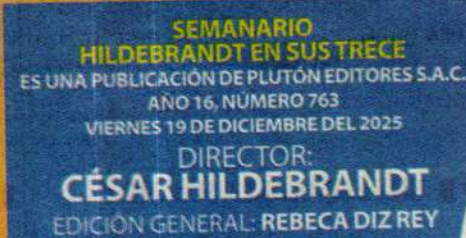
hasta que el país volviera a la normalidad.

El 24 de abril, diecinueve días después del golpe de Estado y luego de hacer el ridículo internacional, Blacker Miller renunció. Fue reemplazado por Óscar de la Puente Raygada. Escribió un libro llamado "La propuesta inconclusa", donde relataba su paso por Torre Tagle, y se dedicó a su consultora financiera La Moneda.

En 1995 fue acusado por Carlos Manrique, hombre de CLAE, de estafarlo con USD 1 millón que le dio para que fundara una corredora de valores. Blacker Miller negó haber recibido el dinero.

Su nombre también apareció en la red de Rodolfo Orellana. Ambos habían creado en el 2009 en Miami una empresa llamada Sagax Investment. La comisión del Congreso que investigó a Orellana descubrió que entre Sagax Investment y el siniestro abogado hubo movimientos de dinero por USD 40,320. ■

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.
REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** ALEXANDRA AMPUERO **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com prensa@hildebrandtensustrece.com www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece
TWITTER: @ensustrece **IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA DICIEMBRE 2025**